

EL PODER CONSTITUYENTE DE LA REVUELTA CHILENA

**Carlos Ruiz Encina
y Sebastián Caviedes**

El poder constituyente de la revuelta chilena

El poder constituyente de la revuelta chilena

Carlos Ruiz Encina y Sebastián Caviedes

 **EN
MOVIMIENTO**

 **CLACSO**



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Directora Ejecutiva

María Fernanda Pampín - Directora Editorial

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory y Marcela Alemandi - Gestión Editorial

Julián Rebón y Bernardo Mançano Fernandes - Coordinación de la colección

Ruiz Encina, Carlos

El poder constituyente de la revuelta chilena / Carlos Ruiz Encina ; Sebastián Caviedes. - 1a ed. -
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2022.

Libro digital, PDF - (En movimiento)

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-813-280-8

1. Conflictos Sociales. 2. Chile. I. Caviedes, Sebastián. II. Título.

CDD 306.6

Corrección: Marcela Alemandi

Diseño de cubierta: Ezequiel Cafaro

Diseño y diagramación: María Clara Diez



CC BY-NC-ND 4.0

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

El contenido de este libro expresa la posición de los autores y autoras y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>



Este material/producción ha sido financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi. La responsabilidad del contenido recae enteramente sobre el creador. Asdi no comparte necesariamente las opiniones e interpretaciones expresadas.

Índice

Presentación En Movimiento	7
Capítulo 1	
La nueva geografía social chilena.....	9
Capítulo 2	
La revuelta social	45
Capítulo 3	
El proceso constituyente y la política	69
Epílogo	
Una crisis de dominación en tiempo presente.....	85
Bibliografía.....	91
Anexo	
Testimonios de la revuelta chilena.....	99
Sobre los autores.....	121

Presentación

En Movimiento

La potencia de las luchas sociales se destaca en los trazos de la historia reciente y en la geografía de nuestra América. Diferentes movimientos y, en ocasiones, verdaderas rebeliones ciudadanas han empujado cambios en los tiempos sociales y políticos de nuestra región. Estas luchas ponen en cuestión desde la práctica colectiva los clivajes de la desigualdad persistente, los modelos de desarrollo excluyentes y ecológicamente no sustentables, así como la anemia democrática y el autoritarismo. En su desenvolvimiento vetan gobiernos y políticas, promueven demandas que desbordan los canales institucionales, constituyen identidades colectivas, configuran territorios como resistencias y existencias, factualizan experiencias de transformación y superación, renuevan el debate público, ponen *En Movimiento* a la sociedad. Pero la movilización no es patrimonio exclusivo de los sectores populares, ni de las fuerzas progresistas y las izquierdas.

También se hacen presentes acciones colectivas de diverso tipo que se activan en respuesta a avances logrados por estas luchas y por las experiencias de gobiernos populares. La política de las calles y de los campos representa así un elemento significativo en la disputa por el futuro y el horizonte del cambio. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales pone a disposición de las y los lectores esta colección de libros que, en clave de difusión, se propone dar cuenta de los principales movimientos, revueltas y conflictos de la América latina y el Caribe del siglo XXI. Desde diferentes tradiciones del pensamiento crítico y las ciencias sociales, la biblioteca *En Movimiento* pone en debate la riqueza y el protagonismo de estas luchas y los senderos de transformación que abren.

Bernardo Mançano Fernandes
Julián Rebón

Capítulo 1.

La nueva geografía social chilena

Chile en América Latina: el neoliberalismo avanzado detrás de la crisis social

De la noche a la mañana se resquebrajó la imagen ejemplar de Chile en América Latina. La fortaleza del incestuoso matrimonio entre neoliberalismo y democracia, cuyos defensores se esforzaron por presentar al mundo tantas muestras de progreso económico y estabilidad política, buscando disimular su original instalación autoritaria, hizo agua por los cuatro costados. Aunque desde inicios de siglo se acumulaban indicios de una mayor agitación social, que dejaba atrás la letanía de los años noventa, pareció ocurrir que su conocida excepcionalidad conservadora giraba en sentido opuesto, producto de protestas masivas y persistentes, inimaginables hasta ese momento. Durante semanas, de un extremo a otro del país, el miedo atávico de las oligarquías latinoamericanas a perder el control de las masas y verlas asomarse a las puertas de sus reinos se hizo realidad en Chile y se transformó

en pesadilla de unas élites políticas, económicas y culturales ensimismadas en su autocomplacencia. Iniciado en octubre de 2019, el reventón social encontró su combustible en un reclamo generalizado contra la extrema mercantilización de las condiciones de vida, que se condensó en un grito por dignidad que desbordó al sistema político, y que abrió un nuevo rumbo que hasta hoy mantiene en alerta a observadores de todo el mundo ante la posibilidad de que donde nació el neoliberalismo pueda ser también sepultado primero.

Tras más de dos años desde su inicio, la revuelta chilena decanta en las coordenadas de un escenario de crisis neoliberal más amplio en América Latina. Como en Chile, en otras sociedades donde se vive una profunda transformación neoliberal, como Colombia y Perú, también ciudades y plazas mayores se abarrotan de personas protestando durante 2021, en manifestaciones que ni cuentan con una dirección política central ni logran ser procesadas por sus respectivos sistemas políticos. El desconcierto cunde entre las clases dominantes, mientras de fondo, y no por casualidad, resuenan consignas y canciones y se enarbolaban banderas y símbolos parecidos a los de la revuelta chilena, acompañando un despliegue de valentía y creatividad característico de los pueblos de estas tierras.

Síntoma del agotamiento de la dominación neoliberal, esta oleada de estallidos sociales, así como la propia defensa de aquel régimen, vuelve a situar el análisis del proceso social y político en la perspectiva latinoamericana. Obliga, recordando el sentido que ha tenido el esfuerzo intelectual por formular una mirada propia, a analizar nuestras formaciones sociales considerando la especificidad de los procesos históricos de la región. En este caso, a mirar a Chile desde América Latina. Apuesta que no es obvia ni sencilla, debido a que, escudados en la referencia a lo global, a menudo interpretaciones que dicen hablar desde América Latina no hacen sino caer en generalizaciones abstractas. Ocurre hoy con el neoliberalismo, visto como “razón de la historia”, cuando se omite la forma concreta de su instalación y consolidación en cada sociedad. Ha ocurrido, en general, con las mutaciones del capitalismo, cuando se universalizan, sin tiempo ni lugar, sus mecanismos, dinámicas y efectos. Un camino a contramano de la más básica lección del pensamiento social latinoamericano: aquella sobre actualizar constantemente la tipología del capitalismo nacional, partiendo de una idea de América Latina como unidad dentro de una evolución histórica internacional, en tanto estructura con caracteres propios y no solo enumeración descriptiva de unidades nacionales (Cardoso y Faletto, 1969).

Una clave de interpretación clásica y poderosa, que dotó a la sociología del subcontinente de la orientación científica, moderna y anticolonial que alguna vez tuvo (Torres, 2021). Una estrategia crucial para entender hoy las crisis políticas que proliferan, incluyendo la chilena.

Dentro de las modalidades que adopta el capitalismo neoliberal en América Latina, Chile destaca. Y es que, si bien en la región el giro neoliberal es un hecho generalizado desde inicios de la década de los noventa, sus grados de profundidad difieren notablemente entre países. Pese a que en cada uno cambia de algún modo la conformación de las alianzas sociales dominantes, se tuerce la orientación del Estado y se consagran los marcos ideológicos que preparan el terreno para su irrupción, no en todas las experiencias latinoamericanas dichas transformaciones alcanzan los mismos niveles de refundación capitalista respecto del ciclo nacional-popular anterior. De allí que pueda distinguirse, siguiendo una tipología descrita en trabajos previos (Ruiz, 2019; Ruiz y Boccardo, 2015), un neoliberalismo ortodoxo o *avanzado* en Chile, en contraste con Argentina, Venezuela o Bolivia, en donde se retrotrae la transformación neoliberal a modalidades más próximas a las orientaciones nacional-populares, en base a rearticulaciones en torno al Estado (*neoliberalismo revertido*); o, como

ocurre en Brasil y, en menor medida, en Uruguay y Ecuador, con experiencias cuya variante de giro neoliberal descansa en pactos que pueden apuntarse como *liberal desarrollistas*, en tanto combinan reformas típicamente neoliberales con mecanismos de protección que incorporan a fuerzas sociales de reciente aparición. Solamente México, Colombia y Perú, y más tardíamente Paraguay, son similares a la experiencia chilena, al seguir estos países un curso ortodoxo, en tanto tampoco retoman los viejos modos de procesamiento institucional de los conflictos sociales, propios del Estado de Compromiso (Weffort, 1968), ni las formas clásicas de participación de la etapa nacional-popular, concentrándose el conflicto en cómo los grupos sociales subalternos resisten una creciente exclusión estatal.

El giro neoliberal chileno destaca por producir una transformación radical en la estructura social y en las tendencias que marcan su patrón de conflicto social y político, en relación con el siglo XX. Dicha profundidad reside no solo en el tiempo de duración que alcanza este ciclo histórico, iniciado bajo la dictadura pinochetista y que en su continuación ininterrumpida bajo los gobiernos civiles completa casi medio siglo, sino en el tipo de rupturas que implica su proyección hasta el presente. En efecto, si a la base de cualquier variante de giro neoliberal se encuentran procesos de privatización

de las empresas públicas ligadas al viejo desarrollismo, en Chile le sigue un segundo ciclo privatizador, enfocado esta vez en el sistema de servicios sociales, lo que proyecta una tendencia a la mercantilización de las condiciones de vida que, aunque se muestra como un rasgo típico de la contrarrevolución neoliberal (Harvey, 2005; Fontana, 2017), alcanza en este país una hondura inédita, al privatizarse tempranamente áreas sensibles como la educación y la salud, otras de importancia estratégica como la energía eléctrica y la administración de los fondos previsionales, e incluso recursos vitales como el agua.

El patrón de crecimiento económico que emerge de esa radical refundación se sustenta en la reprimarización, desindustrialización y tercerización de la economía, con foco en la promoción activa de las exportaciones, la actividad financiera y los servicios (Solimano, 2012). A ello se suma un régimen de prescindencia estatal en la regulación de las relaciones laborales, que niega a los trabajadores el acceso a los procesos de construcción del Estado (Ruiz, 2015). En democracia este esquema se profundiza, mediante la diversificación de rubros y mercados de exportación (vía tratados y acuerdos bilaterales de libre comercio), el sostenimiento de una política social focalizada que cancela cualquier iniciativa de derechos sociales universales y

la conservación de una serie de exenciones y garantías para el capital privado, nacional y extranjero (Fazio y Parada, 2010).

Si bien desde el retorno a la democracia este patrón de crecimiento económico logra una significativa reducción de la pobreza, que contrasta con el deterioro en las condiciones de vida que muestran por esos años gran parte de los países latinoamericanos, persisten altos niveles de desigualdad del ingreso debido a la monopolización que pequeños grupos hacen de las rentas generadas. Tal concentración económica se explica por la profundidad que alcanza una singular modalidad político-institucional de acumulación capitalista, con predominio rentista y dependiente del Estado, basada en el traspaso a entidades privadas de recursos fiscales para la provisión de los servicios sociales que habían sido previamente privatizados. Este *capitalismo de servicio público* (Ruiz, 2015), que ya en dictadura había provocado el ascenso de nuevos sectores exportadores y consolidado el poder financiero sobre la producción de recursos naturales (Ahumada, 2019), estimula luego, bajo los gobiernos civiles, el fortalecimiento de una intrincada red de propietarios, inversionistas y concesionarios privados de los servicios sociales. Esto último se hace, sobre todo durante la bonanza económica de los años noventa y a través de la

expansión del gasto social estatal, articulando el modelo de alianza público-privada con la entrega de *vouchers*, para ampliar así el acceso a las variantes privadas de servicios sociales fundamentales, siguiendo el principio monetarista del subsidio a la demanda, de gran influencia en la tecnocracia chilena. A esto se suma la operación de distintos esquemas de concesiones, que complementan las iniciales privatizaciones, mediante los cuales se traspasa a empresas privadas el financiamiento, construcción y gestión de infraestructura vial, portuaria, hospitalaria e incluso carcelaria, ampliándose los nichos de acumulación privada protegidos por un Estado neoliberal que se resiste a fortalecer lo público.

Son, entonces, un cúmulo de decisiones políticas las que fomentan la concentración económica que origina la aguda desigualdad que caracteriza a Chile. Producida políticamente, dicha desigualdad persiste gracias a la acción de un Estado que activamente impulsa la acumulación capitalista privada, de forma desregulada y rentista. Lo contrario a un “Estado mínimo”, como alegara el discurso de presentación del neoliberalismo en la región (Ruiz, 2019). A fin de cuentas, el resultado de un capitalismo en el que las fuerzas del mercado asoman solo como una sombra escuálida, mientras priman oligopolios en prácticamente todos los mercados,

debido al actuar político de unos grandes empresarios que eliminan la competencia y encadenan a las firmas de menor tamaño (Solimano, 2018).

Así pues, de rápido avance y sin contenciones políticas y sociales de peso, el neoliberalismo prospera en Chile de una forma lineal que contrasta con el carácter interrumpido, plagado de crisis políticas y sociales y hasta reversiones, que tiene su marcha en el resto de América Latina. Este es el trasfondo histórico de la concentración económica y la desigualdad. No obstante, que en ambos fenómenos se ubique el eje de las contradicciones principales que hoy recorren a la sociedad tiene que ver menos con una cuestión estrictamente económica que con el hecho de que la fuente de tal asimetría, al situarse en la reproducción social, tenga un efecto sociogenéticamente relevante de alteración de la estructura social, en tanto crea nuevos grupos y clases sociales que a su vez experimentan conflictos no homologables a los que primaran en la etapa nacional-popular.

Esto significa que no es solo una diferencia de ingresos –por ejemplo– lo que explica el malestar chileno y la reciente revuelta social. Aunque es fundamental, la desigualdad, que no disminuye en estos años con el crecimiento económico, no es el único factor explicativo. Antes bien, se trata, sobre todo, de la aparición de nuevos conflictos sociales

y culturales que resultan de la estela transformadora del neoliberalismo ortodoxo. Unos conflictos que experimentan en carne propia los vástagos de dicho proceso.

Los hijos de la modernización neoliberal

La transformación de la estructura social, en que anida la conflictividad que se manifiesta en la revuelta chilena, expresa la pérdida de peso específico de las viejas bases sociales de sustentación de los proyectos políticos del siglo XX chileno. Especialmente en los casos de la clase media desarrollista y de la clase obrera industrial, el giro neoliberal significa el fin de sus condiciones de existencia, producto del desmantelamiento de los viejos servicios públicos, la privatización de las grandes empresas estatales y la desindustrialización feroz que sigue a la apertura comercial desenfrenada. Si a esto se añade el factor coactivo, lo que resulta es una desarticulación de los actores sociales tradicionales no apreciable con la misma intensidad en el resto de América Latina, en donde la trayectoria zigzagueante del avance neoliberal permite aún hoy divisar sectores sociales

arraigados a la conformación social del siglo pasado y sus correspondientes determinaciones culturales (Ruiz, 2019).

Entre los fenómenos más importantes vinculados a la mutación social chilena se encuentra la expansión de la condición profesional. Particularmente, porque ella pierde prácticamente todas las garantías que suponía en su antigua versión desarrollista, cuando constituía un boleto de entrada a una consolidada posición de “clase media”, al entregar una relativa prosperidad material, estabilidad social y el acceso a una diferenciación cultural nítida respecto del mundo popular. Anclada a una expansión mayoritariamente de carácter asalariado privado, especialmente en el rubro de los servicios, estas nuevas franjas profesionales se nutren de un amplio espectro de fracciones de “primera generación”. Sus modos de distinción social se vinculan a las credenciales educacionales que detentan, a sus ingresos y a niveles de consumo elevados, así como a unas inéditas posiciones de estatus y confort que contrastan con las historias de vida de sus padres. En sus orientaciones de sentido, por ello, predomina el esfuerzo individual por sobre la acción colectiva, al tiempo que prevalecen como aspiración las representaciones de éxito y los estilos de vida que ostentan los grupos económicos y las franjas gerenciales privadas (Ruiz y Boccardo, 2014).

La fragilidad y heterogeneidad de su principal fuente de expansión, situada en el explosivo crecimiento de la matrícula universitaria privada en Chile, explica la veloz depreciación de sus credenciales y estatus. En primer lugar, porque si bien acceden a los empleos asalariados calificados que alentara la pujanza de la empresa privada durante los años noventa, se involucran rápidamente en unas condiciones de precariedad laboral que se generalizan al compás de la flexibilidad y rotación que inundan al mercado de trabajo. Pero, además, ello se enlaza a un ensanchamiento en proporciones y calidades tan disímiles de aquella educación superior que inicialmente les permitiera diferenciarse, que terminan originándose nuevas segmentaciones y desigualdades en las estructuras de oportunidad que rodean a estos nuevos profesionales. Esto deriva en un progresivo deterioro de la condición profesional misma, con el arrojamiento periódico de cientos de miles de jóvenes a un mercado laboral débil y estrecho, cuya estructura se mantiene incólume sin importar si se viven momentos de expansión o de contracción económica. Un escenario que empeora si se considera que, en su mayoría, el acceso a dicha formación terciaria depende de un alto endeudamiento familiar, generalmente con la banca privada, dada la desregulación del mercado universitario chileno. Es así como

estos nuevos sectores medios corresponden, más bien, a un ascenso muy inestable de los ingresos y una universalización de la educación terciaria con base en una oferta privada disímil. Resulta una franja social enorme y heterogénea, que alberga nuevas formas de diferenciación social internas, con múltiples fracciones de reciente integración, sometidas a una alta rotación laboral, y que exhibe un bajo grado de constitución de clase y una reproducción social altamente individuada, debido a su falta de acceso a formas asociativas viejas o nuevas (Ruiz y Caviedes, 2020).

El cambio en la condición obrera, por su parte, se liga a la desindustrialización y privatización de la economía y a las trabas que impone una nueva legislación laboral pro-empresa que se proyecta, sin mayor cambio, desde la dictadura a la democracia. Al igual que en el caso de los nuevos profesionales, tras la expulsión de los grupos obreros de la esfera económica estatal en los años ochenta, es la empresa privada en la década siguiente la que impulsa su reabsorción, e incluso la incorporación masiva de grupos laborales femeninos al mercado de trabajo y de grupos antes “marginales” por sus raíces en la hacienda y la periferia urbana. Un reclutamiento que se concentra en los servicios, dadas las bajas barreras de entrada que dominan, lo que no les asegura el acceso

a las gratificaciones y el prestigio asociados históricamente al empleo no manual. Aun así, estos “obreros de servicio” acceden a participar de una dinámica de producción capitalista moderna, en la que conviven con las nuevas franjas profesionales y las gerencias de la empresa privada, erigidas en sus referentes culturales. Esa integración redonda en sus valoraciones y expectativas, explicándose el éxito económico más por el nivel educacional, la iniciativa personal y el apoyo familiar que por la acción estatal o a instancias de organización sindical (Ruiz y Boccardo, 2014).

Aquí también la integración temprana, generacionalmente favorable, de estos grupos de trabajadores a la modernización neoliberal se produce circunscrita tanto a las debilidades de la estructura productiva chilena como a las modalidades de integración laboral con que el capital privado (y también el empleo estatal) disciplina económicamente a la fuerza de trabajo. Lo que predomina es una condición laboral marcada por una muy alta rotación y magras condiciones de organización, donde se combinan jornadas parciales, trabajo a destajo o por tareas, con una condición forzada de “independiente”, en tanto trabajadores por cuenta propia, en modalidades que diluyen las antiguas formas de identidad por el oficio (Sennett, 2005) y acarrear bajos grados de constitución de clase. Esto sucede

en zonas urbanas y también en el mundo rural, donde masivos contingentes de trabajadores con pasado campesino son incorporados a modernos procesos de producción de recursos naturales para exportación, que cambian el paisaje de la explotación en estos territorios, promoviendo el surgimiento de nuevas ciudades intermedias, agrarias y urbanas a la vez, plenamente conectadas al mundo (Canales, Canales y Hernández, 2018).

Así, entre los nuevos profesionales y los nuevos grupos de trabajadores que produce la expansión de la empresa privada, bajo una alta concentración económica y desigualdad, corre un doble proceso de homogenización económica y heterogenización sociocultural. Ambos grupos, disímiles entre sí, se encuentran en las mismas cadenas de producción y experimentan una similar cercanía con el proceso de modernización, bajo la contradicción de incorporarse a ella en condiciones de gran inestabilidad e incertidumbre económicas. Al mismo tiempo, tales grupos se encuentran cruzados por las exigencias de una vida cotidiana en extremo privatizada, cuya administración, además, debe resolverse individualmente ante el deterioro de los servicios públicos fundamentales que provee el Estado.

Estas dimensiones productiva y reproductiva de la avanzada neoliberal chilena se imbrican con

particular agudeza en los procesos contemporáneos, válidos para profesionales y trabajadores sin cualificación, de desplazamiento del trabajo de sus *locus* tradicionales y sus tiempos habituales. La precarización no solo se expresa en la inestabilidad y alta rotación que ocasiona la superposición de labores en condiciones muy diversas, sino que alcanza una verdadera deslocalización espacial y temporal del trabajo (Ruiz, 2020a). Para sectores mayoritarios, la labor deja atrás la vieja oficina o la fábrica, para hacerse ubicua en cualquier lugar y momento de la semana, gracias a unas tecnologías de la información y comunicación que empalman vida y trabajo. Esto es especialmente importante en el extendido mundo de los servicios, que se externalizan de este modo abusivo, y en los que no hay organización ni regulación de tales procesos. La auto-explotación cunde y ella marcha vinculada a una expansiva feminización del mercado de trabajo, que agrega horas familiares a las nuevas modalidades de explotación extendida. La precariedad, así, enfatiza también las desigualdades de género e interviene en la estructuración de los grupos familiares y en el modo en que estos se organizan.

Lo anterior redundaría en que no haya aún un reemplazo consolidado de las desestructuradas identidades sociales y culturales del siglo XX en el paisaje social chileno. El patrón de desigualdad imperante

transversaliza el vértigo de la incertidumbre material y vuelve homogénea la situación económica de amplias franjas sociales, incluso si hay entre ellas diferencias de ingreso significativas. Sin embargo, lo que experimentan internamente los nuevos profesionales y grupos de trabajadores es una heterogeneidad sociocultural profunda, abigarrando en su constitución diversas capas y culturas, en lo que resulta ser una “zona gris” de la estructura social chilena que no alcanza aún la madurez para devenir en clase *para sí* en cuanto tal, salvo que se fuercen las herramientas analíticas disponibles.

Esto último es relevante, teniendo en cuenta el afán por resolver esta encrucijada por vías especulativas en las ciencias sociales chilenas, sobre todo al caracterizarse a los nuevos profesionales y sectores medios. Si hasta hace poco se insistía con la tesis de la expansión de las clases medias, sea como elogio al “milagro económico” noventero (Sapelli, 2011) o bien desde la ambigüedad de afirmar su condición de clase mientras en paralelo se destacaba la disolución de sus características distintivas (Espinoza, Barozet y Méndez, 2013; Franco, Hopenhayn y León, 2010), tras la revuelta social se ha producido un cambio. Hoy la afirmación de la existencia de clases medias en Chile ha implicado advertir de un supuesto giro en su naturaleza. Se ha pasado, así, de la tesis de su expansión a la de su pauperización, considerando

la distancia económica y social que las separa de los sectores acomodados. Este salto argumentativo se ha valido de la evidencia internacional que muestra cómo, desde la década de 1980, se asiste en todas las regiones del mundo a un aumento de las desigualdades de ingreso. En particular, cómo los niveles de renta entre los percentiles 60 y 90 de la distribución mundial, que corresponden a las clases medias y populares en los países ricos, han sido los grandes olvidados del crecimiento económico de este periodo. La renta media de dicho sector no ha progresado al mismo ritmo que la de los grupos de mayor y menor renta, lo que disminuye las desigualdades entre la parte baja y media de la distribución, mientras crece entre la parte alta y media (Milanovic, 2017; Piketty, 2019). Impulsados por esta referencia, interpretaciones sobre la revuelta chilena la han apuntado como el estallido de una clase media frustrada por no poder seguir ascendiendo socialmente, en contraste con unos años noventa en los que la “clase media emergente” aún percibía la recompensa a sus esfuerzos (Tironi, 2020). Otras han concluido, inclusive, que tal pauperización dio vida a una nueva clase que encabeza la revuelta, forjada en el deterioro de las capas medias tradicionales y su acercamiento económico a las clases populares, cuya unión –léase, interés de clase– se encontraría en la similitud de sus ingresos y un imaginario común del agobio

(Martuccelli, 2021). Dos lecturas que reducen procesos de formación de clase, de largo aliento, a ciclos de crecimiento económico intermitentes y frágiles como los que vive Chile en las últimas décadas, y cuyo carácter volátil y desigual, lejos de generar condiciones para la emergencia de clases medias, contribuye a profundizar el deterioro de tal condición hasta su práctica desaparición actual.

La contracara de esa débil constitución entre los sectores subalternos se ubica en los grupos sociales que monopolizan el poder, la riqueza y el prestigio, particularmente el gran empresariado. Este actor, con sus *holdings* articulados en la égida financiera, exhibe unos altos grados de constitución de clase que contrastan con su vieja dependencia estatal. Sus capas más dinámicas ya no piden favores al Estado ni demandan la clásica protección del siglo pasado, que justificaba el esfuerzo desarrollista. En vez de eso, imponen decisiones en diversos campos del modelo de desarrollo y la política económica, mientras varios grupos económicos locales se internacionalizan y avanzan sobre la región, compitiendo con grandes empresas globales. Por otro lado, imponen sus decisiones en ámbitos como la cultura y la educación, mostrando un inédito ascendiente sobre la sociedad, también como dirección intelectual y moral de la misma, puesto en términos gramscianos.

En el ámbito político, su posición de poder se refuerza hasta alcanzar sus definiciones a partidos y gobiernos. Esto produce una colonización empresarial de la política, a partir de la conformación de una comunidad de intereses entre las élites políticas e intelectuales que participan de los gobiernos civiles y segmentos del mundo empresarial, especialmente los grandes grupos económicos. Una colaboración que deviene vínculo orgánico, y cuya medida de su arraigo es la participación de importantes personajes de la alta burocracia estatal en la dirección de varias de las empresas surgidas de las privatizaciones y concesiones llevadas adelante en el último medio siglo. Una circulación que es de ida y vuelta, al asumir la dirección de ministerios y otros cargos políticos de confianza antiguos agentes de empresas y asociaciones gremiales con intereses en áreas que luego, como funcionarios públicos, les toca impulsar o fiscalizar. Una velada corrupción, en suma, cuyo efecto más trascendente es el tipo de poder constituido. Uno que remite a la neo-oligarquización a que dan lugar los últimos treinta años (Ruiz, 2020a), y que se afinsa en la formación de nuevas tecnocracias que articulan el maridaje de los viejos enemigos que pugnarán durante la transición a la democracia (Caviedes, 2018), pero que ahora dan vida a una nueva nobleza. Algo que, de paso, corroe cualquier señal de

identidad socialdemócrata como la que alegan para sí todos los gobiernos civiles de la que fuera la coalición dominante tras la caída de Pinochet: la Concertación de Partidos por la Democracia.

En consecuencia, el grado de constitución de clase y el poder que alcanza lo que prospera como la *clase capitalista* chilena en la etapa neoliberal se funda, económica y socialmente, en una capacidad expansiva y una actitud proyectiva que contrasta con la tradición de conservadurismo y debilidad del empresariado chileno del siglo XX, manteniendo hacia la esfera política su vieja capacidad de cooptación, por la que se estrechan los lazos entre segmentos de las capas propietarias y de las élites políticas civiles.

Pero, además, dicho poder se basa en su capacidad para organizarse *desorganizándose* a los demás grupos y clases sociales en formación (Przeworski, 1978), quienes enfrentan dificultosos procesos de emergencia social y política. La reorganización de la propiedad y, en general, de las condiciones de la dominación y de la explotación, destruyen el rostro del viejo mundo subalterno, a partir del giro estructural que se vive. Así, la formación de uno nuevo, en las nuevas condiciones históricas neoliberales, no es un proceso rápido ni lineal. A ambos lados de la confrontación se viven agudos procesos de cambio, pero el sentido oligárquico que la transformación

neoliberal conlleva permite una estabilización más pronta y clara del lado del poder constituido que del poder por constituirse, de raíz subalterna.

Estos efectos diferenciados de la transformación neoliberal impactan en los ejes de la conflictividad social y se desplazan los clásicos códigos del enfrentamiento social y político de antaño, relativos a las pugnas distributivas y el arbitraje estatal, así como las modalidades asociativas y el tipo de relación con el sistema de partidos que le acompañaba en el siglo pasado. No es que desaparezcan, pero sí se debilitan dichos patrones tradicionales. Y, a partir de ese debilitamiento, se abren camino nuevas formas de conflicto social y de intervención política, forjadas al calor de las contradicciones económicas y socioculturales propias de la nueva geografía social que ha producido el neoliberalismo avanzado en Chile.

La nueva conflictividad social bajo la larga duración neoliberal

La manifestación concreta de aquellos nuevos conflictos implica la aparición de nuevos actores y movimientos que se insertan en ellos. Estos, en no

pocos casos, rivalizan con las viejas organizaciones sociales y sindicales que dominaran la escena de la lucha social.

Es así que, en el año 2007 y tras la escasa actividad huelguística de los años noventa, asoman los primeros conflictos representativos de una fuerza de trabajo propiamente neoliberal. Se trata de las masivas y violentas protestas de los trabajadores subcontratados de la minería, la agroindustria y el sector forestal, en contra de la restrictiva legalidad que los regula y sus precarias condiciones de trabajo. La temprana liberalización en dictadura de las relaciones laborales estimula la subcontratación de la actividad principal de las empresas y conduce a una externalización de las obligaciones previsionales y laborales, especialmente en los rubros que encabezan la modernización neoliberal. Se le suma una legislación que separa la unidad económica de la entidad empleadora y posibilita que las empresas se dividan en múltiples entidades, mientras sindicatos y negociación colectiva quedan institucionalmente encapsulados en el último empleador de la cadena, en línea con una sindicalización que es por empresa y no por rama de actividad. Esto reduce la fuerza de los sindicatos y elimina *de facto* su capacidad para negociar colectivamente, al tiempo que abre un conflicto de nuevo tipo que enfrenta a la fuerza laboral subcontratada con las

grandes empresas “mandantes”, que externalizan funciones y servicios, y con los pequeños intermediarios subcontratadores con los que se relaciona directamente. En las protestas mencionadas, el conflicto supuso, además, un choque entre subcontratados y trabajadores de planta, de empleos estables, cuya condición aparecía, ante ojos de los primeros, como la de verdaderos rompehuelgas al continuar con sus labores. En años posteriores, el avance de este nuevo sindicalismo, más transversal y desde la base, distinto al configurado desde la empresa (Echeverría, 2013), alcanza a otros núcleos de la economía a medida que la precariedad y flexibilidad marcan la experiencia laboral de cada vez más trabajadores. Ello ocurre en los servicios y el *retail*, pero también en el Estado, en cuya estructura de empleo, externalizada a partir de un manejo gerencial, proliferan variedades muy disímiles de trabajadores fiscales, a menudo siquiera reconocidos como tales.

Por su parte, y siguiendo una tendencia general en América Latina al aumento de la conflictividad socioambiental, desde inicios del siglo XXI asoman nuevos actores sociales que se enfrentan a los efectos contaminantes de las actividades extractivas, así como a la apropiación ilegal y explotación indiscriminada de recursos vitales como el agua. En el caso de esto último, si bien se cuentan en Chile

varios años de sequía, el origen de la actual crisis hídrica es político antes que “natural”, en tanto se relaciona con la desigual distribución de los derechos de aprovechamiento de agua, concentrados en manos de unas industrias energética, minera y agroindustrial altamente dependientes de ellos. Además, desde lo jurídico e institucional, se vincula a una concepción del agua como bien transable y exclusivo, susceptible de dar vida a un mercado, lejos de su denominación como derecho humano.¹ En la base de esta conflictividad, entonces, están las consecuencias que acarrea el giro primario-exportador que instala la experiencia neoliberal en Chile y sus efectos de concentración patrimonial. De allí que los actores sociales que lo enfrentan no puedan ser reducidos a ideales conservacionistas más conocidos o asimilados a los movimientos verdes de las experiencias políticas del capitalismo central. Ellos luchan, más bien, contra la desigualdad y explotación territorial producida por presiones específicas sobre el medioambiente, en lo que es un

1 Aunque los derechos de aprovechamiento de agua existen desde la Colonia, bajo el giro primario-exportador reciente su posesión –entregada gratuitamente por el Estado– se concentra e, inclusive, genera un mercado para su intercambio, privando de agua para consumo humano a amplias franjas de población rural.

conflicto, en definitiva, contra la mercantilización de la tierra y de los recursos naturales, que produce la actual fase del desarrollo capitalista local.

Junto con ello, esta privatización de la vida cotidiana y su reproducción es también definitiva del antes y después de esferas que son habitual escenario de pugnas. Es lo que ocurre con la educación, la salud, la vivienda y la vejez, cuya suerte queda en manos de grandes empresas privadas que las someten a un forzado lucro especulativo, coincidente con el repliegue de la responsabilidad estatal y la falta de derechos sociales garantizados. Así, se extiende, como sello de una conflictividad propiamente neoliberal, su sometimiento a un *régimen de responsabilidad individual* que, bajo la ausencia de estructuras asociativas capaces de cualquier incidencia relevante en la distribución general del ingreso, introduce altos grados de individuación forzada. Como resultado, el acceso a estas esferas de la antigua protección social pasa a depender del ingreso individual, inestable y volátil.

En educación, contra el sentido tradicional que les imprimen a sus disputas los movimientos de reforma del siglo XX, relacionados con los fines de la enseñanza entregada y la ampliación social de su acceso, lo que predomina en Chile –como lo expresan la “revolución pingüina” de los estudiantes secundarios en 2006 y el movimiento por la

educación de 2011– es una lucha contra el avance del lucro privado, como principio rector de una actividad tan relevante para la cultura, la integración y el conocimiento. En la educación escolar, este avanza sobre el retraimiento de la educación pública y el fomento de una educación privada subvencionada extensamente. En educación superior, sobre el desdibujamiento de la distinción entre instituciones públicas y privadas, resultante de un financiamiento estatal indiferenciado, que deviene no solo en una desnaturalización de la idea misma de universidad pública, al someterse los planteles estatales a la competencia por captar financiamientos, sino también en una profundización de la carga financiera sobre las familias y el Estado (Sanhueza y Carvallo, 2018). Es así como, en contraste con cualquier otro sistema público de educación superior en América Latina, los universitarios chilenos llegan a pagar montos similares al costo de una vivienda por sus carreras. Esto lo hacen, generalmente, tomando créditos con la banca privada, cuya rentabilidad asegura el aval que el Estado les otorga. Si el estudiante cae en cesación de pagos, el Estado cubre y protege al banco, en una modalidad de *voucher* cuyo volumen crece año a año y se multiplica en el caso de las universidades privadas, debido a la desregulación del precio de los aranceles. Una dinámica que ha generado

un nuevo problema social, la deuda educativa, al emerger toda una generación de trabajadores profesionales endeudados, que vinculan estos costos –o sea, la dimensión económica del conflicto– a una inquietud creciente por su destino, generalmente ajeno a sus expectativas iniciales y a las de sus familias.

En salud, el núcleo del conflicto también remite al lucro privado, particularmente en los niveles del aseguramiento y la provisión de servicios sanitarios. Sin embargo, en aquel avance, tanto o más importante que el deterioro de la provisión pública son los efectos de las medidas implementadas para atenuar los déficits sistémicos en materia de atención de salud y prestaciones. Ello porque en torno a dicha necesidad se ha empujado una mercantilización basada en la segmentación del acceso por la capacidad de pago individual, así como en la negativa a fortalecer el sistema público de salud en favor de un traspaso directo de recursos estatales a entidades privadas. Una decisión política que no solo ha contribuido a robustecer el mercado de la salud, sino también a crear un mercado con las prestaciones públicas de salud, siguiendo nuevamente la lógica del *voucher* o subsidio a la demanda, a través de la licitación de un listado de patologías que son adjudicadas a clínicas privadas, y que les proveen de nichos de acumulación que se encargan

de rentabilizar aún más por la vía de maximizar el uso del espacio físico en favor de las enfermedades más costosas. Esta dinámica facilita la concentración e integración vertical del sistema, lo que provoca el surgimiento de grupos empresariales que llegan a contar, simultáneamente, con intereses en las áreas de seguros y prestaciones de salud y en la de venta de medicamentos (Goyenechea, 2019). Es por esto por lo que los actores sociales que se movilizan por el derecho a la salud en Chile lo hacen en oposición al aseguramiento privado, del mismo modo que surgen organizaciones ciudadanas que buscan bajar el costo de las medicinas.

El afán de lucro privado también afecta a la vivienda. Desde los años noventa se impulsa una política de subsidios a la demanda focalizada en grupos de bajos ingresos, mientras la banca privada amplía el acceso al crédito hipotecario. Pero esto no disminuye el déficit cuantitativo de viviendas en el país, sino que lo aumenta, pues dicho mercado se convierte en foco de especulación financiera gracias a la desregulación de la que gozan los proyectos inmobiliarios privados en términos de precios y calidades de construcción. Esto, a su vez, encarece y deteriora las políticas estatales de vivienda, debido a la concentración del suelo urbano y la especulación que con él realiza la industria inmobiliaria.

La suma de estos factores provoca el surgimiento de actores sociales que luchan por el acceso a la vivienda y la democratización de la ciudad, en un contexto en el que, además, ha cambiado la naturaleza del habitante de los *campamentos*, tomas de terreno que históricamente han servido para paliar el déficit habitacional de las ciudades chilenas. Los pobladores actuales, que vienen creciendo en número desde antes de la revuelta y la pandemia, hoy son personas no necesariamente pertenecientes a la pobreza extrema de ingresos como ocurría en el pasado. En vez, se trata de familias con jefaturas que a menudo cuentan con empleos en sectores plenamente vinculados a la modernización neoliberal, pero cuyos ingresos volátiles las incentivan a desistir de la compra o arriendo de viviendas, en tanto dicho gasto deprime, en grado sumo, el poder adquisitivo de sus salarios e ingresos (CES, 2021). Este panorama obliga a replantear el viejo asunto de la marginalidad en Chile, pues ya no se trata de grupos urbanos excluidos de la dinámica del capitalismo local, sino de unos altamente integrados, pero cuya posición no les asegura nada. Situaciones como esta han llevado a un cambio en la fisonomía de la pobreza local, desde su imaginario de pobreza “descalza” a una suerte de *post-miseria* relacionada con el acceso a mercancías y mensajes culturales importados y una relativa cobertura de las necesidades vitales.

Por último, respecto a las pensiones, con marchas anteriores a la revuelta que superaban el millón y medio de personas, se trata de la resistencia y rechazo a las condiciones de extrema privatización que se ciernen sobre lo que constituye, en definitiva, un salario diferido expropiado. En Chile, el vigente sistema privado de pensiones se basa en una capitalización individual que fija en los esfuerzos personales la retribución que al final de la vida laboral se obtiene, lo que altera el principio de solidaridad intergeneracional que está presente en la mayoría de los regímenes previsionales del mundo. Puesta la cotización forzosa en manos de administradoras privadas, que invierten los fondos en modalidades bursátiles en las grandes empresas y cobran abusivos costos de administración, los ahorros de los trabajadores terminan convertidos en fuente de formación de capital, mientras las pensiones pagadas son abiertamente magras y se sitúan, muchas veces, por debajo de la línea estadística de la pobreza oficial. Esto convierte en pobres a personas que, mientras trabajaban, no lo eran, sin importar el escenario macroeconómico. De ello resulta una vejez arrojada a la total incertidumbre, no solo por el cambio abrupto en las condiciones de vida, sino por la exposición desregulada de los ahorros a las crisis económicas internacionales, incluso tras jubilarse, dependiendo de la modalidad mediante la que se haga.

En todos estos ámbitos, la financiarización, en tándem con la mercantilización y privatización, se propaga como principal alternativa para llenar los déficits de protección social que genera el repliegue de la responsabilidad estatal. El crédito privado –bancario y de tiendas de *retail*– interviene decisivamente (Pérez-Roa, 2019), convertido en una forma de extensión del salario y también de la explotación. Las finanzas organizan una extracción de valor directamente desde el consumo, sumándose a la explotación clásica en la producción. Una *explotación ampliada* que, por cierto, se agudiza en el caso de las mujeres, si se considera el diferencial que implica su labor en el ámbito de la reproducción, a partir de la división sexual del trabajo y otros modos de opresión (Gago, 2019). Así, la idea original de que la masificación del acceso al crédito se relaciona con el acceso a un consumo suntuario o, en su defecto, vinculado a bienes de equipamiento o inmuebles, tal como se enarbolará para celebrar el “milagro económico” criollo, se diluye. Y es que lo que alguna vez fuera usado para agregar bienestar a la vida familiar, hoy se usa para resolver necesidades básicas. Con medios de crédito se pagan servicios sociales fundamentales e incluso los alimentos, en un esfuerzo de sobrevivencia que, salvo por una pequeña parte de la población más acomodada, no distingue entre grupos sociales, géneros ni edades.

Estos derroteros coinciden en sumarse a una expropiación de la soberanía del individuo sobre su vida (Ruiz, 2015). La mercantilización de las áreas mencionadas agrega fuentes de incertidumbre y explotación cada vez más difíciles de soportar, incluso en un país en donde los ingresos crecen. La financiarización, por ello, crece más rápido a raíz de una mercantilización que la convierte en necesidad, ante la falta de protección social y el creciente costo de la vida. Tal incertidumbre, que es sinónimo de crisis de racionalidad, es el motivo por el cual la nueva conflictividad no se forja solamente en la oposición a la mercantilización de la existencia social y un reclamo por derechos sociales, sino también en torno a demandas que apuntan al reconocimiento, la libertad y la autonomía individual.

Las luchas contra el patriarcado encabezan estas demandas, incluidas aquellas contra la violencia estructural, por la soberanía sobre el cuerpo y derechos sexuales y reproductivos y contra la discriminación a las disidencias sexuales. Se les suman, aunque en el plano de demandas territoriales y culturales históricas, las de los pueblos indígenas por su reconocimiento cultural y autonomía política. Un conjunto de conflictos que, aunque interseca con los ligados a la mercantilización de la vida social, encuentra su origen en el carácter conservador

de la democracia chilena. En efecto, un rasgo central de la transición democrática chilena fue el predominio de los aspectos procedimentales, vinculados al cambio en el régimen político, en desmedro de otros relacionados con el modelo económico o la incorporación de intereses populares en las decisiones políticas. Ello generó que la política institucional terminara en un ensimismamiento elitario (Lechner, 1988), lo que produjo una paulatina desidentificación de la sociedad con sus actores y objetivos. Algo que se expresa en la continua caída de las tasas de participación electoral desde el plebiscito de 1988. Una desidentificación que, no obstante, se manifiesta más como apoliticismo que como despolitización, pues si bien nace de la desconfianza hacia la esfera política y otras élites sociales (empresarial, militar, eclesiástica y mediática), no inhibe la alta propensión hacia la movilización que muestra la sociedad (PNUD, 2019). Así, entonces, la demanda por derechos sociales universales, que remite a una protección estatal hoy inexistente y a constricciones políticas sobre la expansión mercantil sobre la vida, se acompaña de una amplia exigencia por mayores grados de autonomía individual y colectiva, que rebasa abiertamente el ideal de libertad mercantil propugnado por el neoliberalismo, para plantarlo en una desbordante gama de ámbitos sociales y políticos.

La articulación de estos conflictos se encuentra en la desigual distribución de poder que los genera. Una que se forja en la concentración económica, partiendo de la propia acción socialmente diferenciada de un Estado que la promueve. Como contracara, está la negación institucional de esa nueva conflictividad emergente, vinculada a la explotación mercantil de cada vez más esferas sociales y recursos fundamentales para la vida humana y no humana. Ello deriva en que las luchas por libertad y autodeterminación de los propios hijos de la modernización neoliberal avancen sin encontrar calce en la institucionalidad social, política y económica heredada de la dictadura y reformada parcialmente en democracia, que no las reconoce ni política ni jurídicamente (Ruiz, 2020a), algo que lesiona la calidad de la política y profundiza la separación entre la política y la sociedad en Chile, hasta provocar el desborde de las estructuras institucionales vigentes.

Es, entonces, a partir de esto que debe examinarse la crisis chilena. Particularmente, entendiendo que lo que estalla el 18 de octubre de 2019 es una crisis eminentemente social. Una condición que la diferencia de otras coyunturas críticas en la historia reciente de América Latina, como la ocurrida, por ejemplo, en la Argentina en 2001. Y es que en Chile lo que se desata no es ni una crisis política

ni una de tipo económico, sino que ambas vienen después como efecto de la propia revuelta y, más tarde, de la pandemia (Rebón y Ruiz, 2020). Esto es así porque, como se ha insistido, sus orígenes se atan a un tiempo histórico más largo, complejo y refundacional, relacionado con la singularidad de su giro neoliberal y la radical transformación que este introduce. Mezcla, a su modo, los tiempos de la historia –siguiendo la metáfora braudeliana–, siendo la revuelta social un acontecimiento que nace, y a la vez incide, en el rumbo de esa coyuntura larga de refundación del capitalismo local. Un tiempo inmenso, sociológicamente hablando ahora, cuyo resultado no se reduce a la sola mudanza de la estructura social, sino, antes bien, implica la emergencia de una nueva geografía social anclada, a su vez, en otra más amplia y relevante de explotación y desigualdad.

Capítulo 2.

La revuelta social

El Octubre chileno

La revuelta de octubre de 2019 se inserta de un modo particular en la historia chilena. Si bien, como ocurre con otros estallidos populares previos, como los registrados a inicios y mediados del siglo pasado, asoma la protesta de estudiantes y sindicatos, su intervención no supone la conducción del proceso. Del mismo modo, aunque se rodea de discursos latentes y actores organizados que apuntan a una crítica general del modelo económico y de las restricciones del sistema político, tales reivindicaciones no encarnan en líderes visibles, al tratarse de una manifestación inorgánica, masiva e inmanejable para un Gobierno y una institucionalidad política que no supo reaccionar ante ella.

La organización estudiantil, aun así, es fundamental en sus inicios. El actuar de los estudiantes secundarios, que prenden la mecha con su llamado a evadir el pago del Metro en Santiago, define el papel central que juega la juventud en la revuelta.

Testigos de la dureza de la vida privatizada al mirar a sus propias familias, su llamado también seguía una pugna que en 2019 los había enfrentado a autoridades políticas decididas a criminalizar sus protestas. Invasiones de la policía en varios liceos de Santiago se habían registrado, con fuertes enfrentamientos entre estudiantes y Carabineros, en un año en el que volvían las protestas por el deterioro de la educación pública, marcada por problemas curriculares y de infraestructura. El Gobierno, por su parte, impulsaba una ofensiva legislativa anti juvenil dirigida, entre otras cosas, a disminuir hasta los catorce años la edad de los controles “preventivos” desarrollados por la policía y a aumentar la discrecionalidad de los directores de escuela para expulsar y cancelar matrículas a estudiantes que cometieran faltas graves.

En ese ambiente crispado, el 4 de octubre, un panel de expertos del Ministerio de Transportes decreta la segunda alza del año en la tarifa de la locomoción colectiva santiaguina. El alza era de treinta pesos y, sin mayor explicación, se atribuía al contrato de concesión que domina el transporte público de la ciudad, el que, si bien ha permitido su modernización, lo convierte en uno de los más caros de la región. Ante ello, dos días después entran en escena los primeros grupos de escolares que invaden las estaciones del Metro y saltan sus torniquetes en

señal de protesta. Desde el Gobierno se busca bajar el perfil al alza apelando a la obligación de los contratos, mientras algunas autoridades espetan frases desafortunadas, como la dicha por el ministro de Economía respecto a que “quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja”.

Aunque las acciones de los estudiantes crecen en intensidad y violencia a medida que pasan los días, aumenta también el apoyo de los transeúntes, quienes aplauden sus intervenciones y paulatinamente se suman a ellas. Las protestas continúan contra la opinión gubernamental que insiste en su tenor injustificado e ilegal, hasta llegar al viernes 18 de octubre cuando la simpatía inicial deviene en una incorporación masiva de los adultos. La respuesta oficial es el cierre de la red de Metro, lo que coincide con el fin de la jornada laboral y el retorno de los trabajadores a sus hogares. La falta de locomoción y gran congestión vial que ello provoca generaliza las protestas, y los manifestantes se enfrentan con la policía. En la noche, la violencia aumenta, y son atacadas estaciones del Metro, varias de las cuales resultan quemadas. Se producen también los primeros saqueos y quemas a buses de transporte y a algunos edificios en el centro de Santiago. La transmisión en vivo de estas imágenes a través de la televisión impacta. Lo mismo que aquella que capta al Presidente celebrando el

cumpleaños de su nieto en una pizzería de un acomodado barrio de la capital, ajeno a lo que ocurre en el resto de la ciudad. De vuelta en La Moneda, Piñera declara el estado de emergencia e invoca la Ley de Seguridad del Estado, ordenando el despliegue de militares en las calles y dejando en sus manos el control del orden público y la seguridad.

En los días siguientes no decae el ánimo de las manifestaciones, sino que crece y se extiende hacia otras ciudades. Aunque el sábado 19 se decreta toque de queda en la capital y Piñera suspende el alza de la tarifa del transporte público y convoca a una mesa de diálogo institucional, miles de personas se vuelcan a protestar en las calles o desde sus hogares. En Valparaíso y Concepción se registran protestas, las que al día siguiente llegan a Coquimbo y La Serena. Los arrestos se extienden por diferentes lugares del país, al igual que los heridos y muertos. Al finalizar el tercer día de protestas, los números oficiales hablan de 103 incidentes de gravedad en todo Chile, con 1.462 detenidos. Además, se contabilizan 11 muertes. Durante esa noche, y tras una reunión de emergencia en la Guarnición Militar de Santiago, Piñera acusa, a partir de información de inteligencia que recibe, un alto grado de organización entre los grupos que quemaran el Metro y de injerencia extranjera, señalando que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”.

La reacción popular a sus palabras es de repudio, y los cacerolazos se multiplican en varias ciudades esa misma noche. Al día siguiente, manifestantes irrumpen en los principales canales de la televisión abierta los acusan de desinformación. Otro grupo avanza hasta las afueras de la Escuela Militar en Santiago, donde se topa con un cordón de militares armados, apoyados por tanquetas y francotiradores. En jornadas posteriores, mientras las protestas y enfrentamientos continúan, el Gobierno propone una “Agenda Social” que mezcla iniciativas en tramitación y otras nuevas como un “ingreso mínimo garantizado” y la baja en el precio de los medicamentos. Crecen, por su parte, los cuestionamientos hacia el Ministro del Interior Chadwick, por la violencia ejercida por policías y militares, tras conocerse las primeras denuncias por torturas, maltratos, abusos sexuales y ataques con armas de fuego. Causa revuelo, además, un audio en el que la esposa del presidente comenta las informaciones de inteligencia que el Gobierno manejaba, y que hablan de un sabotaje organizado contra sectores estratégicos. Así lo hace también su resignado comentario acerca de que deberán “reducir sus privilegios y compartir”.

El viernes 25, mientras se envían al Congreso proyectos para congelar el alza de las tarifas eléctricas y aumentar la Pensión Básica Solidaria

(subsidio complementario para las pensiones más bajas), se producen cortes de ruta a raíz de la movilización de camioneros, automovilistas y motoristas contra el cobro excesivo en las carreteras. En la tarde, las habituales protestas en el centro de las grandes ciudades desembocan en la “Marcha más grande de Chile”, que convoca, solo en Santiago, a más de 1 millón 200 mil personas. La movilización histórica de esa jornada reafirma la magnitud de la movilización y anula cualquier atisbo de duda sobre su transversalidad. Ante ello, tres días más tarde, Piñera concreta un amplio cambio de gabinete, aunque no incluye en él a las ministras de Transportes y Educación, altamente cuestionadas.

Las movilizaciones persisten en los días siguientes y la política, sin respuestas acordes a su magnitud, contribuye a un incremento acelerado de la violencia, que va desdibujando las razones de la revuelta. Esto lo aprovecha el Gobierno, que apuesta por separar a los manifestantes pacíficos de los violentos, exigiendo a la oposición la condena de estos últimos. La parálisis del país, sin embargo, obliga a Piñera a declarar por primera vez, a fines de octubre, que no descarta una reforma que permita modificar la Constitución.

Es así como a inicios de noviembre los hechos se precipitan. El Gobierno y su coalición se abren a un cambio constitucional, bajo la presión militar y

económica que crece. Proponen como mecanismo la conformación de un Congreso Constituyente, compuesto de parlamentarios, y un plebiscito ratificatorio. Con ello buscan responder al avance de la consulta nacional por una Nueva Constitución que impulsa la Asociación Chilena de Municipalidades, y que cuenta con el apoyo casi total de los alcaldes oficialistas y de oposición. Pese a ello, sin concretarse anuncio alguno, el 12 de noviembre se vive una jornada de extrema violencia, especialmente en Santiago. Se producen saqueos y destrozos y ataques a cuarteles militares, entre ellos el de Tejas Verdes, vinculado a los orígenes de la dirección de inteligencia de la dictadura. La situación obliga a Piñera a anunciar el impulso de tres grandes acuerdos: uno “por la paz y contra la violencia”, otro “por la justicia” y un último “por una nueva Constitución”. Al día siguiente, el presidente del partido oficialista Renovación Nacional, Mario Desbordes, advierte que “hay uno o dos días” para lograr una salida a la crisis, sin descartar un plebiscito para definir el mecanismo constituyente.

El 14 de noviembre se realizan treinta y dos manifestaciones en todo Chile y siete en el extranjero, en una jornada en la que se conmemora un año del asesinato del joven dirigente mapuche Camilo Catrillanca, asesinado por Carabineros. Pese a lo esperado, las protestas se desarrollan en forma

pacífica, con incidentes aislados y algunos saqueos hacia su término. Tras una larguísima jornada en el Congreso, que se extiende hasta la madrugada del día siguiente, once partidos políticos firman un acuerdo que abre la puerta a una nueva Constitución. Al día siguiente surgirán dudas por sus alcances y se generarán deserciones en el Frente Amplio por críticas al acuerdo. En la derecha, la toma de conciencia de sus dirigentes respecto a lo negociado divide las aguas y los apoyos a una nueva Constitución.

Tras el acuerdo, las protestas continúan. Se extienden, con distinta intensidad, hasta que se ponen en marcha las medidas para el control de los contagios por covid-19, en marzo de 2020. Pero incluso bajo confinamiento se producen actos que desbordan el control policial, alentados por el énfasis represivo del Gobierno y el deterioro económico que provoca la pandemia, y que mantiene latente el origen socioeconómico de la revuelta. Se registran desde las habituales marchas y concentraciones en el centro cívico de Santiago, pasando por llamados a la destitución del Presidente, hasta protestas relacionadas con las precariedades que agudizan el desempleo y el hambre provocados por el frenazo económico generado por el virus. Esta duración marca otra diferencia con estallidos sociales anteriores, de más corta duración y circunscritos a localidades o regiones específicas.

La singularidad de esta revuelta social también se halla en las acciones políticas que genera y las conexiones que establece con la memoria histórica. Un catalizador es el actuar de las fuerzas policiales y militares, que agrava el conflicto inicial. Esto se apoya en la evidencia recogida por organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros, que ya en diciembre de 2019 confirman la ocurrencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos desde el 18 de octubre en adelante. La tónica es el descontrol de la fuerza policial, que deja al descubierto la debilidad interna de Carabineros, institución descabezada varias veces en los últimos años debido a la corrupción que involucra a ex-generales, siguiendo un patrón similar al del Ejército. Esto conformó un escenario de consecuencias dolorosas como la “epidemia sanitaria” –así catalogada por la Sociedad Chilena de Oftalmología– que implican los cientos de afectados por lesiones oculares a causa de disparos de balines, perdigones y otros proyectiles como las bombas lacrimógenas. Pese a ello, transcurridos más de dos años desde el inicio de la revuelta, solo cuatro agentes del Estado han sido condenados por violaciones a los derechos humanos, pese a las más de 8 mil víctimas que contabiliza la Fiscalía (El Desconcierto, 2021). Se estima, además, que las detenciones durante este acontecimiento llegaron a unas 20 mil, con 3 mil heridos y 34 muertos.

Si bien tanto los impactos asociados a la protesta como la represión que le sigue abarcan todo Chile, destaca como escenario principal de las manifestaciones lo ocurrido en la Plaza Baquedano, en el centro de Santiago, renombrada “Plaza Dignidad” durante los días de la revuelta. Consistentemente cada tarde, en torno a esta explanada, se producen enfrentamientos entre la fuerza policial y manifestantes encapuchados. De este modo, así como en otros eventos con los que se ha comparado la revuelta chilena –como la Primavera Árabe–, la toma de la plaza mayor se convierte en símbolo de la movilización popular. Una tarea ardua, por cierto, que convoca a cientos de personas y da origen a estructuras de autodefensa y autocuidado bien organizadas. La llamada “Primera Línea”, que encabeza los enfrentamientos, se transformó en un actor propio y singular de las manifestaciones. Su objetivo declarado: permitir que duraran las marchas convocadas en la Alameda, intervenidas a poco andar por Carabineros a través de los carros lanza-agua y otras medidas antidisturbios. Una defensa de posiciones de llamativos rasgos, en donde se enfrentan agentes de Estado, provistos de escudos y armamento, con manifestantes equipados con armas arrojadas, en su mayoría trabajadores, inmigrantes, estudiantes universitarios y barristas de fútbol. A estos se suman voluntarios médicos

que, agrupados en “brigadas de salud”, improvisan hospitales de campaña a un costado de las calles.

Lo ocurrido en Plaza Dignidad también llamó la atención por su despliegue lúdico y artístico. En sus alrededores, tal como ocurre en otras muchas plazas y calles en todo Chile, las paredes y aceras se llenan de frases y grabados, imágenes y dibujos, que dan cuenta de las demandas sociales. “Chile despertó” asume como su estandarte, a la par de la arenga que llama a seguir “Hasta que valga la pena vivir”. En esa escena cotidiana, la plaza cobija la energía identitaria del pueblo asomado a las calles, con *performances* de todo tipo y la emergencia de nuevos personajes en la cultura popular, como la “Tía Pikachu” o el “Negro Matapacos”, perro mestizo que antes acompañara las protestas estudiantiles del año 2011. En ella también se izan nuevos símbolos, como la bandera chilena de luto y la *Wenufoye*, bandera de la nación mapuche. La plaza, así, se transforma en un punto de reunión para la resistencia y la creación colectiva (Paredes, 2021), a la vez que permite entretrejer relaciones de reconocimiento entre causas diversas o de apoyo mutuo (Márquez, 2020).

Pero la dimensión cultural de la protesta social sobrepasa lo ocurrido en Plaza Dignidad y se conecta, sobre todo, y más allá de lo artístico e identitario, con la conducción que ejerce sobre ella

el movimiento feminista. Un nivel de liderazgo femenino de un movimiento popular que es alto y, posiblemente, inédito a nivel internacional. Sobre aquel, se articulan las demandas socioeconómicas con aquellas por reconocimiento, redistribución y representación (Fraser, 2015) que también exigen los manifestantes. El propio 2019 se había iniciado con una multitudinaria marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Bajo la demanda por el fin a la violencia sexual, política y económica hacia las mujeres, por un trabajo digno y estable, el derecho a la vivienda digna y la despenalización del aborto, la movilización se convirtió, antes de la revuelta, en la de mayor calado desde el retorno a la democracia. Este hito fue el punto de llegada del “Mayo Feminista” del año anterior, que movilizara una demanda transversal que mezcló el enfrentamiento a la violencia patriarcal con la particular condición de inclusión/exclusión que viven las mujeres en el Chile neoliberal, en donde, a la masividad y celeridad de su integración al mundo laboral y educativo, le sigue, paralelamente, una aguda precarización y desigualdad en la valoración social de su trabajo y actitudes (Ruiz y Miranda, 2018). A esto se suma el incremento de las denuncias por violencia sexual y de los feminicidios en el país, que tuvo un apoyo de alcance mundial en la *performance* “Un violador en tu camino”

del colectivo feminista Las Tesis, estrenado en noviembre de 2019.

En fin, multifacética y extraordinaria, la revuelta social vivida hace más de dos años en Chile juntó y mostró un conjunto de dilemas nuevos e irresueltos acumulados. Vinculó entre sí a actores sociales que venían constituyéndose desde antes y desbordó un sistema político que reaccionó impávido. El Octubre chileno, por eso, no es una crisis inesperada. La fuerza de su andar, en un Chile desidentificado con la política institucional, mostró que tal distancia no convivía con una sociedad quieta, sino permanentemente movilizada. Fue la hora en que un nuevo pueblo rugió, alertando sobre su existencia.

Un nuevo pueblo chileno

Pero dicha existencia ha tendido a ser negada en los últimos años. La presencia de actores sociales de alguna significación e historicidad propiamente tal en este acontecimiento ha sido obviada de diversas formas. Las versiones van desde reducir este proceso a un hecho episódico, que resume la reiterada etiqueta de un “post-octubrismo” como vuelta a la

normalidad, hasta explicaciones que reducen todo el cúmulo de explotaciones y abusos anotados a un “hastío” que daría lugar a un “gentío”, no a un actor popular, o simplemente a una “muchedumbre” debida a una crisis que, ajena a cualquier particular, resulta eminentemente universal y reiterada y se corresponde con ciclos acelerados de modernización y sus típicas contradicciones culturales (Martuccelli, 2021; Peña, 2021; Tironi, 2020). Al contrario, a partir del 19 de octubre de 2019, hemos apuntado la irrupción de un nuevo pueblo (Ruiz, 2020a; Ruiz y Caviedes, 2020), un sujeto histórico compuesto por la diversidad social y cultural que produce la honda y longeva experiencia neoliberal. Un pueblo y no una clase, con procesos de formación de clases aún en curso bajo los cambios de la estructura social y su conflictiva conformación, y que hoy, en su condición subalterna, se contrapone a una oligarquía neoliberal surgida de la comunidad de intereses de las élites sociales y políticas chilenas de las últimas décadas. Oligarquía, no en el sentido hacendal del arraigo agrario y conservador que mantuvo en el siglo XX, sino en el sentido de gobierno de pocos, con la concentración del poder y la riqueza bajo el neoliberalismo ortodoxo. La revuelta popular reciente es una nueva contraposición entre pueblo y oligarquía, propia de la especificidad de la expansión capitalista de carácter neoliberal.

De ahí la relevancia de atender la fisonomía y carácter del pueblo chileno actual, que pretende negar el repaso intelectual antes anotado, en un empeño similar a las pretensiones de desmovilización popular que se impusieron en la transición a la democracia, para respaldar aquella versión de gobernabilidad como proyección de la desarticulación social heredada de la dictadura. Hoy, de nuevo, los relatos buscan diluir el sujeto oligárquico al que se enfrenta la revuelta popular, a través de discursos relativos a cursos de evolución social, donde no hay relaciones de poder y dominación claras y, por tanto, se naturalizan.

El origen de este nuevo pueblo está en la transformación neoliberal y el carácter de la confrontación que lo define. No hay pueblo, como sujeto histórico, sin la contraposición a una élite, en una configuración social y política que remite a los cambios neoliberales, a los cursos de neoligartización que cobija y las nuevas modalidades de explotación y dominio que abre. Es, por eso, un conflicto que apunta a una redistribución del poder e incluso de la propiedad, en las formas en que se producen los procesos de apropiación neoliberal, como fase específica de expansión capitalista, donde bajo nuevas modalidades crece la desigualdad, se fusionan los poderes político y económico y estas élites neoligárquicas se separan del resto de

la sociedad (Streeck, 2017; Winters, 2011). Esta concentración del poder degrada la democracia política, elude cualquier pacto social y empuja una crisis de representación política. La extrema experiencia neoliberal chilena arroja un poder económico sin precedentes en su historia, alza nuevas barreras sociales y culturales y degrada la política como esfera de procesamiento de legítimos conflictos de intereses. Un panorama de una élite muy reducida y una sociedad homogenizada en sus condiciones de vida y posibilidades económicas, diferenciación social a la que, además de estas fisuras económicas, le sigue un sistema de cierre cultural en colegios, barrios, centros vacacionales y confesionales, que ahondan la fractura con el resto de la sociedad.

Claro, esa asimetría social, económica y cultural no basta por sí misma para generar un pueblo que la confronte. Hacen falta procesos que gatillen su constitución histórica, como un pueblo en lucha. Más que un dato estructural, los pueblos se construyen en su propio accionar, abriendo crisis de dominación en las que despuntan cambios en su fisonomía subalterna, y adoptan una forma histórico-concreta de la conciencia social. Esta revuelta es uno de esos procesos, ya que acelera la formación de identidades que ya estallaban separadas dentro de la estructura social forjada por la transformación neoliberal. Lo hace a partir de la crisis social

y política que acarrea el magro estatuto que el neoliberalismo otorga a la política y la vida pública en general, que busca reducir en la forma de una libertad que reubica en el individuo y su racionalidad en torno al mercado (Ruiz, 2019). Un empeño que, iniciado en dictadura con la desarticulación social y política de las viejas identidades sociales del siglo XX, se prolonga en los últimos treinta años en Chile a través del restrictivo carácter que adopta la democracia, factor fundamental, este último, que ignoran los relatos de la revuelta popular reducidos al agobio o a naturales desajustes de los ciclos de modernización, donde, en definitiva, se niega la condición de actor popular. La transformación neoliberal origina un nuevo panorama de la explotación y la desigualdad, carente de expresión política. En contra de ello, la revuelta popular demanda una ampliación democrática a partir de un ensanchamiento de su restrictivo carácter social.

Desde inicios del siglo XXI, crecen las tensiones entre la nueva geografía social, aún en formación, y la institucionalidad política vigente. La propia coexistencia de demandas por derechos sociales y por autonomía individual, en apariencia contradictoria por sus anclajes respectivos en viejos idearios contrapuestos, ilustra un cambio que exige la actualización política de los propios idearios emancipatorios. Es un rasgo que caracteriza a la

revuelta social, donde se superponen protección y autonomía en un grito por dignidad que la preside y que aglutina disímiles coordinadoras y movimientos sociales ante la aguda mercantilización de las condiciones de vida: una sociedad en curso de organización a la que se suman sectores que no lo están, donde descolla un individuo que exige reconocimiento y espacio en su condición de tal. De ahí una generalización de intereses, de la certeza de que los cambios pasan por confrontar a la élite que concentra el poder, y de que un sujeto popular expresa una forma de la conciencia social antioligárquica, bajo los rasgos de la historia reciente, con anclaje en diversos sectores y grupos subalternos de la sociedad.

Este pueblo, con la revuelta, origina la crisis política. Enfrenta la restrictiva democracia de la transición y abre un proceso constituyente y el ascenso de nuevas fuerzas políticas, en suma, un nuevo ciclo histórico. Desborda el sistema político en que no cabían sus demandas, emanadas del nuevo panorama de explotación y desigualdad. Es un nuevo pueblo, no aquel del siglo XX, de obreros industriales y mineros, profesionales y funcionarios públicos, campesinos y pobladores, con intereses y formas de organización asentadas y tradiciones de lucha conocidas en sus cimas y derrotas, como la propia experiencia de la Unidad Popular (Ruiz, 2020b).

Esta vez, para ponerlo en clave latinoamericana, la polaridad de la confrontación, a diferencia de aquella crisis de la alianza desarrollista cifrada en el Estado de Compromiso, es una élite neoliberal. Los análisis que niegan la existencia de un sujeto popular oponen el Estado neoliberal actual a un Estado de Bienestar que desconoce la discusión latinoamericana acerca de la especificidad del Estado en el desarrollo del capitalismo en la región. En el siglo XX, es el inestable y contradictorio Estado de Compromiso y no un Estado de Bienestar, inexistente históricamente en América Latina, en el que la alianza nacional-popular se liga a la incapacidad de las burguesías criollas para detentar una hegemonía de clase sobre el proceso social, dada su condición dependiente. El predominio de movedizos arreglos policlasistas que se expresan contradictoriamente en el Estado tiene abundante literatura en el pensamiento social latinoamericano (Weffort, 1968; Kaplan, 1969; Cardoso y Faletto, 1969; Lechner, 1981; Faletto, 1989). Esta vez, el bloque de dominación surge de la fusión neo-oligárquica de las élites que rigen en la transición chilena a la democracia, que concentra el poder y se distancia de la sociedad, lo que cifra la “gobernabilidad” en la reproducción de la desarticulación social heredada de la dictadura, sin espacio para arreglos sociales más inclusivos.

Así como una crisis social y política desata el fin de la dominación oligárquica agraria a inicios del siglo pasado, con la irrupción de las masas en la vida política, hoy se está ante otra crisis de tal escala, fraguada en la larga duración de un neoliberalismo extremo y su cerrada negación política, social y cultural del mundo subalterno, que su propia expansión reorganizó drásticamente. Contra esa exclusión se enfrenta la demanda por reconocimiento del nuevo sujeto popular, hasta abrir paso a una redefinición política.

De ahí que, a diferencia de enfoques que niegan la existencia de un actor en este sujeto popular, no es posible ignorar las causas políticas de la revuelta, lo que remite el balance crítico a los últimos treinta años que se esquiva. Recuperar la noción de pueblo, ahora en el contexto de una fase capitalista neoliberal extrema como la chilena, se ubica en la tradición latinoamericana que aborda la formación de nuevos sujetos populares desde la especificidad regional de confrontación entre oligarquía y pueblo, la que releva los inacabados procesos de formación de clases muy comunes por estas latitudes, donde la noción de pueblo adquiere connotaciones políticas (Weffort, 1968; Fernandes, 1973; Faletto, 1979, 1977; Zavaleta, 1986; Touraine, 1989; Laclau, 2005; García Linera, 2015). Es una línea, en parte, heredera de la discusión italiana que

abre tempranamente Gramsci y que luego recuperan Virno (2003) y Negri y Hardt (2001), ahora bajo la idea de *multitud* en que transcurre la formación de sujetos populares. Y es que, si la noción de clase alude a un conflicto con orientaciones anticapitalistas, la noción de pueblo se liga a las formas histórico-concretas de enfrentamiento a los modos de dominio y la forja de formas de politicidad que las desafían. Así, la noción de pueblo adquiere sentido como expresión de la lucha política, social y económica de una heterogeneidad de sectores subalternos que se enfrentan a formas neo-oligárquicas de poder, de marcados rasgos estamentales.

Aunque tiene otros antecedentes en el pensamiento crítico occidental, en Gramsci (1981) la noción de pueblo alude no tanto a un objeto como a una relación dinámica, concretamente de dominación (política y cultural, principalmente), a la vez que de búsqueda de emancipación, de resistencias a las formas de integración política subalterna que se imponen en la sociedad de clases. El pueblo, así, no designa a una clase social, sino a un heterogéneo conjunto de “clases” que tienen en común la condición subalterna. De este modo, más que una condición estructural, sobre todo en su acepción cosificante, en Gramsci el pueblo aparece como una relación entre el ejercicio del poder y los esfuerzos de resistencia por desestabilizar

dicho poder y alterar su naturaleza. Hoy en Chile, esta contraposición de carácter popular, antes que clasista, remite a procesos sociales aún en curso hacia un nuevo ciclo histórico. Ello porque lo que sigue atravesando a esta experiencia neoliberal aún dominante, que entra en crisis con la revuelta social, es un desajuste entre estructura y cultura. Un panorama donde, en términos estructurales, predominan condiciones sociales abruptamente mutadas, mientras que sus representaciones culturales apelan a pesadas inercias tradicionales que chocan con los rasgos propios de la nueva situación histórica. Estos últimos se experimentan subjetivamente aún bajo la forma de un malestar mayormente individual, carente de nuevas modalidades asociativas proporcionales a la intensidad de su experiencia personal, que todavía no se elabora socialmente como relato capaz de trazar una formulación de sociedad.

Esa abstracción de las causas políticas de la revuelta social, de la complejidad de su articulación con los grupos sociales que produce el neoliberalismo en Chile y los focos de enfrentamiento sobre los que se configuran las fuerzas sociales movilizadas significa eludir, en definitiva, la dominación política y su crisis como factor central en la formación de las fuerzas sociales, así como el hecho de que la movilización social articula identidades particulares

en una forma histórico-concreta de la conciencia social que se reconoce como pueblo. Es lo que ocurre con versiones como las de “muchedumbre” o “gentío”, alusivas a malestares culturales particulares, que diluyen la configuración popular en un cúmulo de individualidades atravesadas por una experiencia común de “hastío” pero sin identidad colectiva, o en lo que es una frustración con expectativas de ascenso social y distinción por el consumo (Martuccelli, 2021; Peña, 2021; Tironi, 2020).

Estas versiones diluyen la connotación política de que la noción de pueblo surge de la confrontación con una forma de dominio, la del neoliberalismo ortodoxo chileno y los actores políticos que lo sostienen, una ambigüedad donde la frustración de las promesas del modelo no tiene responsables en élites o una dominación concreta que monopoliza las oportunidades, los patrimonios y los ingresos. Que la promesa meritocrática termine en una fantasía no es natural, se liga a modos concretos de cierre social. Los “nuevos profesionales” carecen de la antigua condición profesional, de aquella alta tasa de reclutamiento intergeneracional hoy inexistente y del enorme peso cultural de aquellas clases medias del siglo XX, etiqueta que se les estampa hoy en medio de la proliferación de nuevas formas de diferenciación social, en lo que antaño eran capas profesionales más homogéneas

y, donde hoy no se distribuye por igual la desvalorización de las credenciales y los títulos que a los que alude, por ejemplo Bourdieu, como fenómeno más universal, sino que proliferan bajo el segmentado sistema de educación, productor de nuevas desigualdades.

En fin, la invocación de una “muchedumbre”, con abstracción de su condición social y que omite la crisis política, es parte de un empeño político mayor por docilizar a este nuevo pueblo y sus aspiraciones de cambios, precisamente cuando lo que abrió su revuelta fue un curso de redefinición general de la política chilena.

Capítulo 3. El proceso constituyente y la política

La Convención Constitucional y un nuevo ciclo histórico

Un nuevo ciclo histórico se abre paso en Chile a partir de la revuelta social. La marcha política del país, luego de más de dos años desde su inicio, así lo confirma. El cambio no consiste en contar con soluciones claras a las demandas exigidas en dichas jornadas, sino en asistir al inicio de un proceso de reordenamiento general de la política, con la crisis de las viejas fuerzas y la aún incipiente búsqueda que hacen otras nuevas por apropiarse de las condiciones sociales y culturales forjadas por el neoliberalismo ortodoxo. En tal contexto se despliega el nuevo pueblo, buscando canalizar sus necesidades y expectativas. Se vive, así, un proceso conflictivo y nada lineal. Los primeros años de una larga etapa de reconfiguración, en la que asoma una refundación de la esfera política destinada a abordar el desafío histórico que implica

la demanda por dignidad, que articula protección social y autonomía individual, redistribución y reconocimiento.

Hasta ahora, esa marcha ha estado ligada, fundamentalmente, al inédito proceso constituyente que impulsa la revuelta. Uno que inicia como un salto al vacío de la élite política, por causa del asedio ejercido por la sociedad movilizadora. En efecto, antes del 15 de noviembre, día de la firma del acuerdo, dicha élite impulsa a varios políticos de derecha a apurar la negociación con la oposición y, contra la intención de su propio gobierno, a abrirse a plebiscitar el mecanismo constituyente. Se le suman presiones de sus “aliados naturales”, como el gran empresariado, inquieto por la paralización de las actividades económicas y los malos augurios bursátiles, y las fuerzas militares y policiales, sobrepasadas y cuestionadas por su actuar durante las protestas y decididas a no pagar los costos políticos de una reacción gubernamental meramente punitiva y orientada al orden público, como la que adopta el gobierno de Piñera tras el fracaso de su Agenda Social.

El resultado de estas negociaciones forzadas es una propuesta de itinerario para cambiar la Constitución vigente y así encaminar institucionalmente el conflicto hacia un escenario que

permita realizar las reformas necesarias para cubrir las demandas. Una salida, por cierto, de urgencia e incompleta, cuya torpeza, relacionada con la rapidez con que se negocia, obligó a someter el acuerdo a ajustes políticos no menores en los meses siguientes, debido a sus vacíos respecto al carácter y mecanismos de la participación popular. Esto derivó en que, todavía con la presión social a cuestas, el Congreso diera respaldo a leyes que requerían de un alto quórum, como las que establecieron la paridad de género y escaños reservados para los pueblos indígenas en el órgano constituyente, así como la posibilidad de inscribir listas de independientes de lograrse cierto número de patrocinios.

El plebiscito de entrada del 25 de octubre de 2020, dirigido a consultar sobre la voluntad de cambio y definir el tipo de órgano constituyente, da como ganadores a las opciones “Apruebo” y “Convención Constitucional”, lo que lleva el proceso a una segunda elección, esta vez destinada a elegir a los 155 convencionales encargados de escribir la nueva carta magna. Tales comicios, realizados en mayo de 2021, sorprendieron por un hecho inesperado: la derecha, aunque obtiene la mayor cantidad de escaños (37 de 155), no logra alcanzar un tercio de los representantes de la Convención Constitucional y queda incapacitada

de ejercer su poder de veto en ella.² A esta derrota se le suma la de los partidos que articularan el eje de la Concertación, pues, si bien el Partido Socialista logra 15 escaños, el Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana obtienen solo 3 y 2, respectivamente, eligiendo, además, gran parte de sus convencionales en condición de independientes. Triunfan en la elección, por su parte, el Frente Amplio y sus aliados comunistas (28 escaños), y dos listas de independientes que logran una alta votación: la Lista del Pueblo e Independientes No Neutrales, que obtienen 26 y 11 escaños, respectivamente. Mientras la primera captura un voto anti-partidos y anti-elitario, mediante la articulación de asambleas y coordinadoras surgidas durante la revuelta social en distintas regiones del país, la segunda, con un perfil más moderado y técnico entre sus cuadros, articula

2 En el acuerdo original se determinó que las normas constitucionales de la nueva Constitución necesitan para su aprobación de al menos 2/3 de los miembros del órgano redactor. Esto abría la puerta para que la derecha detentara un poder de veto en caso de obtener un tercio o más de los escaños. Este asunto marcó el debate al interior de las izquierdas en Chile, explicando las divisiones que se produjeron en el Frente Amplio tras el acuerdo y la negativa del Partido Comunista a aceptarlo en un primer momento.

una mezcla de personalidades públicas con activistas vinculados, sobre todo, a Organizaciones No Gubernamentales (Caviedes y Carvallo, 2021).

El gran resultado de los independientes se sustentó en una dinámica de recolección de auspicios y de colaboración entre candidaturas, lo que permitió su aglutinamiento por fuera de las estructuras partidarias, aprovechando las reglas excepcionales que marcaron la elección, un giro de la sociedad no advertido ni por las burocracias políticas ni por los analistas, obnubilados por inercias que rápidamente pierden vigencia en las nuevas circunstancias de reordenamiento político acelerado, como la que insiste en pensar a la política chilena desde un marco interpretativo propio de los años noventa, cuando el sistema político lo determinaban las dos grandes coaliciones que manejan la transición a la democracia.

Este quiebre permitió la irrupción en la política institucional de nuevas identidades sociales ajenas al elitismo que marca a la democracia chilena de los últimos treinta años, particularmente porque la mayoría de los miembros de la Convención Constitucional no tiene pasado en estructuras políticas tradicionales, al mismo tiempo que percibe ingresos y posee –cuando los hay– patrimonios similares a los del común de los trabajadores chilenos, lo cual convierte a este órgano

político en el más expresivo de la heterogeneidad social y económica del país.

A dicha novedad le siguen, además, importantes grados de experiencia política, pues la mayoría de los convencionales ha sido parte del ciclo de luchas sociales recientes en Chile, tanto de las registradas en la última década y media contra la mercantilización neoliberal, como de los esfuerzos de articulación social que produce la propia revuelta. Esto los conecta con una diversidad de demandas y problemáticas sociales (socioambiental, educacional, sanitaria, feminista), cuyo curso de elaboración e impulso político es parte constitutiva de los capitales políticos que detentan. Es así como el órgano constituyente, en resumen, acoge a un mundo social politizado, fortalecido al calor de conflictos a menudo negados por la institucionalidad, los que, desde su expresión local o regional, logran ser proyectados a una escala de deliberación nacional que abre la posibilidad de que puedan ser resueltos institucionalmente (Caviedes y Carvallo, 2021).

Sobre esa singular composición social y política de la Convención Constitucional, que se eleva como un logro de la movilización popular, descansan los subsecuentes desafíos de articulación política y modernización institucional, cuando no de refundación, que se ciernen sobre este proceso, con el

agregado de la expectativa sobre una conducción en manos de nuevas personalidades e intereses sociales. Es, con ello, una puesta a prueba de la propia emergencia social y política subalterna, aún llena de limitaciones de todo tipo, tal como se ha dicho, bajo las condiciones generadas por el neoliberalismo ortodoxo.

Tales dificultades son las que justamente explota la oposición conservadora al interior y fuera del órgano constituyente, la que, ante su debilidad numérica en él, apuesta por el desprestigio y, así, en definitiva, el fracaso de la Convención Constitucional y del proceso constituyente en general. Amplifica, con sus medios de comunicación, declaraciones y errores personales de los convencionales, en ocasiones dados al maximalismo discursivo o a identitarismos que ponen en suspenso la responsabilidad de sus cargos y del histórico curso en que se enmarcan, además de las dificultades de constitución de las nuevas organizaciones políticas que enfrentan. Un coro que encabezan los defensores de la Constitución vigente, promulgada por Pinochet en 1980, y que se articula en la opción “Rechazo”, derrotada en el plebiscito de entrada, pero atenta a activarse cuando se realice el plebiscito de salida para ratificar el documento emanado del órgano constituyente. Se les suman actores de la derecha “liberal”, que, a medida que se hunde el sistema

bicoalicional de la transición, se indiferencia cada vez más de los grupos derechistas radicales.

Pese a estos ataques, y tras unos primeros meses de instalación dedicados a la formulación del reglamento interno que rige su institucionalidad como poder autónomo, la Convención Constitucional ha seguido avanzando en sus tareas. Coincidiendo con la conmemoración de los dos años de la revuelta social, el 18 de octubre de 2021 inicia oficialmente el debate en torno a los contenidos del texto constitucional, con el trabajo de sus comisiones temáticas, las que, además de asesores, se apoyan en la recepción de iniciativas populares de norma y la presentación en audiencias públicas, en las que tanto personas jurídicas como naturales pueden exponer sus propuestas.

El poder constituyente de la revuelta social

La importancia política principal de la Convención Constitucional remite a sus resultados, pero también es ya relevante como fenómeno de emergencia de un poder que emana de la sociedad. Tales resultados, más allá del mandato de actualización y renovación de los principios y órganos de

la institucionalidad chilena, deben contribuir a la resolución de la crisis en curso y a destrabar los cierres autoritarios que han impedido la ampliación democrática y el debate en torno al modelo de desarrollo en los últimos treinta años, abriendo cambios fundamentales para dar respuesta a las demandas expresadas en la revuelta, como la democratización de las decisiones político-estatales, la desprivatización y desmonopolización de la economía y el reconocimiento de las experiencias y conflictos que encarna la nueva sociedad chilena. Un desafío más allá de la consagración de derechos de distinto tipo, como se ha hecho antes en otras partes de América Latina, para abrir espacios para los subalternos en los dominios de la organización del poder central que rige al país.

En el corto plazo, su actuación es relevante en el proceso político general porque tan importante es constitucionalizar la salida del neoliberalismo como el propio proceso social constituyente, el poder de deliberación y decisión de la sociedad que planta en medio de la conservadora política chilena, y la ampliación de la democracia que significa. Es que hablar de poder constituyente es hablar de democracia. De ahí el empeño de obstrucción conservadora que enfrenta. La proyección y consolidación de este impulso de democratización que encarna el proceso constituyente es determinante

para la superación de la brecha que separa a la política y la sociedad que subyace a la crisis, y a la negación de las demandas del nuevo pueblo, de sus características sociales y culturales.

La posibilidad de una nueva Constitución no es producto de un “reformismo de anticipación” de las élites chilenas, sino una conquista lograda por la presión social, a un costo humanitario y material enorme. Es un logro de la revuelta, expresado en la composición de la Convención Constitucional, en las condiciones electorales de paridad de género, representatividad indígena y participación de independientes, que permitieron la apertura a una sociedad ajena a la política elitaria. De ahí viene un proceso constituyente impregnado por un reclamo por dignidad, no de una masa amorfa y carente de sentido, sino de un sujeto histórico particular, que desborda masivamente el sistema político desde su inserción en preocupaciones y conflictos que le son propios y que remiten a la nueva geografía de explotación y desigualdad propia del rumbo actual de la sociedad chilena. En palabras simples, viene del empeño por cambios que atiendan a lo que exige y aqueja al individuo que ha forjado el neoliberalismo ortodoxo chileno; un empeño complejo en su reclamo simultáneo por derechos sociales universales, que exige una protección estatal ausente y limitaciones políticas a la expansión mercantil

sobre la vida social, y mayor autonomía individual, rebasando el ideal de libertad mercantil instalado en las últimas décadas.

El proceso constituyente chileno surge de la movilización de un sujeto histórico-concreto, que genera una crisis específica, cuya resolución solo puede encontrarse en una adaptación de la institucionalidad que dé cabida a las demandas que tal existencia social exige. Es así como su poder constituyente no se limita al sentido jurídico de este concepto, pues la movilización popular no empuja solo por organizar y dar forma jurídica al Estado, en tanto sus demandas son también socioeconómicas y culturales, sino por cambiar la sociedad.

La idea de un poder constituyente anclado y proveniente de la estructura y movilización de un pueblo histórico-concreto, surgido de la crisis de un dominio político específico, se encuentra en la tradición teórica que sitúa lo *constituyente* en la capacidad de formación de la sociedad misma, y no solo de un tipo de poder político en particular. Norbert Elias (2016) apunta, en este sentido, a un poder socio-genético, como capacidad de la propia sociedad de definir las bases políticas, económicas y socioculturales sobre las cuales proyecta su existencia. Se trata, en definitiva, de definir cómo las formas en que se produce la sociedad serán interpretadas y organizadas desde el punto de vista

político. Una línea que empalma con los teóricos italianos del “obrerismo”, en relación con cómo esa capacidad socio-genética se conforma, dentro del capitalismo y especialmente en su etapa neoliberal, en la comunalidad de una explotación compartida, universalizada. En el capitalismo neoliberal, agudamente desarrollado en Chile, el trabajo se convierte en lo común, al expandirse hacia la vida misma, trastocando el mundo privado, con su deslocalización espacial y temporal. Pero esa comunalidad, dada esencialmente por el trabajo y el territorio, no resulta contradictoria con la individuación que la propia experiencia neoliberal genera, de modo que individuación y multitud no resultan contradictorios (Virno, 2003). Siendo esto así, el poder constituyente, nacido al calor de la propia formación del sujeto popular, se erige como contrapoder, la “ontología crítica del principio constituyente” (Negri, 1994), es decir, como una organización alternativa enraizada en la propia estructura del sujeto que la encabeza. Esto encuentra su pertinencia histórica en Chile en la frontera que establece el nuevo pueblo con la libertad mercantil neoliberal que, en definitiva, organiza el eje de su modalidad de individuación en las últimas décadas y de una nueva comunalidad en la explotación universalizada de la que emerge esta nueva multitud y su poder constituyente,

donde el individuo plantea nuevas demandas de singularidad y libertad.

Desde la tradición gramsciana, a la que no es ajeno el desarrollo anotado, el poder constituyente se vincula a un momento de crisis orgánica donde el fin antes predominante de lo social explota, produciendo un desplazamiento entre sus diferentes niveles estructurales, incluido el sistema legal, cuando existe la posibilidad de un cambio sustantivo en la organización política y jurídica de la sociedad. El poder constituyente no es un mecanismo de tiempos pacíficos, sino un actor de períodos críticos, como el abierto en la sociedad chilena hoy, propio de la dialéctica entre crisis y creación.

Un predominio reductivo del sentido jurídico del poder constituyente remite a un problema previo que rodea al análisis sociológico y político: el de fetichizar la política (Ruiz, 2015), una cuestión que se relaciona con la capacidad de diferenciar los procesos de formación de aquellos de realización del poder. El consabido predominio en el capitalismo de una mirada centrada en los objetos, una visión “cosificada” (en la tradición de Marx y Lukács), que oculta las relaciones sociales que deberían ocupar al análisis social y político, es una forma de ver la realidad que no solo abarca a la economía, sino también a otras esferas de la vida social como la política. En este caso, la imagen

dominante desvía la mirada desde los procesos de formación o gestación de las situaciones sociales y políticas hacia sus puntos de llegada, generalmente más espectaculares, oscureciendo los procesos mediante los cuales se conforman y reproducen las relaciones de poder en la sociedad. En contraste, una visión alternativa, que conforma una perspectiva de transformación y supera esa racionalidad dominante, es visualizar a la lucha política como conflicto social: esto es, como una dinámica en la que chocan intereses sociales con diversos grados de unidad y formación, según las correlaciones de fuerza imperantes. Es que los grupos subalternos no se definen mecánicamente a partir de las estructuras económicas, sino que, en el marco de estas, recorren etapas de mayor o menor unidad, al calor de las confrontaciones mismas y bajo la presión dominante por evitar su unidad. Así, la constitución de las fuerzas sociales se da en la lucha misma, y esas confrontaciones definen y resultan dirimidas por los grados de unidad y articulación de cada grupo social.

En la historia, hay momentos de esas luchas en que el desarrollo acelerado de confrontaciones, que involucran a gran parte de la sociedad, incorpora a sectores sociales que comúnmente no intervienen con tanta energía, abriendo un desarrollo acelerado de procesos de acumulación de fuerzas

y de debilitamiento de la dominación. En esas situaciones se juega la suerte de las fuerzas sociales, incluso de las que no entran aún en las pugnas porque se redefinen las correlaciones de fuerza y las condiciones de construcción de fuerzas hacia adelante y se abren condiciones más favorables de unificación y articulación para los que avanzan, mientras se imponen condiciones más adversas para los que son doblegados. Los primeros, a fin de cuentas, imponen sus condiciones de la política (Ruiz, 2015).

En la situación chilena actual, la definición de esas condiciones de lucha presente y futura encuentra en el proceso constituyente un momento de determinación histórica, de gran densidad socio-genética, de expresión desnuda de ese poder constituyente de la sociedad. Con sus potencias y límites, el cambio a la Constitución y la fisonomía misma de la Convención Constitucional consolidan el hecho de que ya no hay vuelta atrás respecto de la dominación política hasta ahora existente. Porque la marcha del proceso constituyente empuja un cambio en el régimen político y en el modelo de desarrollo, en suma, a un nuevo período histórico. La presencia gravitante de actores que no pertenecen al sistema político ya consagra una diversidad inédita históricamente en el ámbito político, el poder constituyente de la revuelta libera, de la mano del cuestionamiento a las instituciones

políticas, fuerzas que empujan un replanteamiento de la forma que adopta el régimen político. Ese poder constituyente demanda el reconocimiento de las nuevas formas de sociabilidad del nuevo pueblo chileno y una concomitante redistribución del poder en la sociedad a través de una ampliación de la democracia, en la cual no basta la fórmula de ofrecer más Estado, sino que la amplía para ofrecer también más sociedad, como esfera de deliberación y decisión para enfrentar la expansión del mercantilismo sobre la vida cotidiana.

En momentos de rediseño y reconstrucción de las instituciones democráticas chilenas, una democracia popular que supere la mera representación y administración y fortalezca sus posibilidades deliberativas, vinculantes, inclusivas y paritarias, late en el imaginario social. Reclama una determinación, un “principio de habilitación social” (Wright, 2010), participación subalterna de carácter vinculante y permanente, fundante de una nueva institucionalidad, que supere la participación electoral tradicional y los plebiscitos consultivos, de carácter delegativo.

Epílogo.

Una crisis de dominación en tiempo presente

Este no es un proceso resuelto, está abierto. Aunque, en cualquier caso, ya no aguanta una regresión a las constricciones de la transición a la democracia, latamente extendidas. Si bien, como anotamos, el cambio venía corriendo desde antes, ese día despunta un nuevo ciclo histórico, cerrando aquél de la transición a la democracia desde la dictadura pinochetista. Es la crisis de dominación del antiguo pacto de esa transición, del bloque de poder sobre el que la gobernabilidad de ese régimen perduró, uno que, en su apelación a condiciones de excepción, duró mucho más allá de sus propias capacidades, al punto de ignorar los nuevos conflictos que contribuye a forjar, como parte de la aún más larga ruta del neoliberalismo en Chile, iniciada en los años setenta.

La revuelta social, como quiebre en esa trayectoria de desmoronamiento, abre un proceso

constituyente inédito por su naturaleza democrática, que definirá las bases del régimen político y del modelo de desarrollo que regirán en los próximos años. El que sigue es un conflicto de fuerzas, que anticipa un interregno antes del asentamiento definitivo de un nuevo sistema político. Entrado en crisis el viejo régimen, lo que abre es un complejo proceso de cambio, atravesado por poderosas resistencias y obstrucciones conservadoras. Son las corrientes del hundimiento de esa estructura de dominio que deriva del pacto entre las élites de la transición lo que se vive hoy: un tiempo, sin vuelta atrás, de reorganización política, cuya estabilización no será lineal ni breve.

Es una crisis de dominación que se expresa en diferentes ámbitos: desde lo social y cultural, como crisis de las expectativas y las estructuras de sentido que dieron legitimidad y certidumbre al orden social creado bajo el neoliberalismo ortodoxo. En lo económico, como crisis del patrón de crecimiento, no solo en cuanto al estancamiento ya anotado, en términos de producto y eficiencia, sino también en relación con su legitimidad social, sea por la sobreexplotación natural de la que depende o por la magra capacidad de integración social que arroja, más allá del acceso a un consumo cada vez más costoso en cuanto a libertades. Finalmente, a nivel político, la crisis del bloque dominante se manifiesta, sobre

todo, en el derrumbe de la vieja Concertación, el componente de aquella alianza que daba sustento político y legitimidad social a la herencia de la dictadura, el que, si bien impulsó importantes avances culturales, sociales y políticos, fue también fundamental para mantener la desarticulación de los grupos subalternos y frustrar la conformación de alternativas políticas, una capacidad de contención y desmovilización que afectó tanto a los grupos que encabezan aquella lucha social que abre el camino a la democracia (a través del temor a la regresión autoritaria), como a aquellos que, en base a las nuevas tensiones, provocadas por la mercantilización y privatización de las condiciones de vida, encabezan luchas distintas desde los inicios de este siglo. Un ocaso que, además, alcanza a la derecha de las últimas décadas, abocada a impedir cambios sustantivos en la herencia dictatorial.

Pero, como en toda crisis en desenvolvimiento, los acontecimientos inmediatos acarrearán cambios en la fisonomía de los propios actores que, en disputa abierta por las orientaciones a primar sobre el rumbo histórico, afectan la escena política, tanto en relación con la emergencia de nuevas fuerzas como con la resistencia de la dominación declinante.

A más de dos años de la revuelta, la pandemia agregó a esa crisis de dominación un deterioro del

panorama económico y de las condiciones generales de vida que, aunque ha sido contenido hasta ahora por las ayudas económicas estatales y el acceso anticipado a los ahorros previsionales que abre la presión social, amenaza con dejar una huella estructural de mayor desigualdad y pobreza, precarizar aún más el empleo y agudizar el estancamiento que ya mostraba el modelo de crecimiento económico.

Dicha incertidumbre y dicho deterioro son capitalizados electoralmente por la extrema derecha tras la candidatura presidencial de José Antonio Kast, que apela a tópicos clásicos como el orden, el miedo al cambio y el anticomunismo, quien, sin embargo, sucumbe en segunda vuelta ante Gabriel Boric, de una alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, que iniciara su postulación mediante la reunión de firmas, por pertenecer a un partido sin representación nacional, en medio de la participación electoral más amplia y polarizada de las últimas décadas.

La elección parlamentaria arroja un Congreso prácticamente empatado, sin inclinación clara hacia los cambios estructurales. Un panorama de nuevas fuerzas políticas en que apenas asoman los viejos actores de la transición. Los partidos de la Concertación son derrotados y quedan lejos de su poderío de antaño. El Partido Socialista y la

Democracia Cristiana pierden en conjunto 600 mil votos respecto del año 2017. A eso se suma la caída de los partidos tradicionales de la derecha, Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, que agregan una pérdida de votos similar. En su lugar, se proyectan al Congreso nuevas fuerzas, como el conservador Frente Social Cristiano, fundado por Kast, y otras de orientaciones más confusas como el Partido de la Gente.

Esta derecha que asoma, que al inicio solo articula el voto pinochetista y evangélico, termina convocando a un espectro social más amplio y diverso, bajo los lemas de orden y seguridad que identifican tanto a trabajadores y emprendedores afectados por el deterioro económico como a quienes se resisten a cambios políticos y culturales fundamentales de los últimos años, como la irrupción del feminismo, expresando la fractura social y política que marca esta encrucijada histórica, capaz de expresar la reacción a los impulsos transformadores abiertos por la revuelta popular.

No en balde, ante este desafío, Boric encabeza una inédita ampliación social y política que sostiene su proyección presidencial que, aunque abre nuevos dilemas de reconfiguración política y de participación social, logra proyectar una defensa de la voluntad transformadora y de resguardo y proyección del propio proceso constituyente en

curso. La trascendental movilización electoral en su apoyo, que supera ampliamente la participación en la primera vuelta (Segovia y Toro, 2022), tiene el peso de replantear en la nueva escena la vitalidad de las fuerzas sociales que abrieron este proceso de cambios.

En una sociedad que se moviliza por cambios reales desde el 18 de octubre de 2019 y desata una crisis de dominación, sigue el choque desnudo entre las fuerzas de la transformación y el conservadurismo en reorganización. Tal como en ningún lugar ni tiempo los cambios históricos han resultado lineales ni breves, en la encrucijada chilena de reales horizontes de transformación, de posibilidades de ampliación de la democracia y del propio carácter social de la política, las correlaciones de fuerzas definirán el carácter y alcance de los cambios. Hoy lo que es seguro, sin embargo, es que el cambio social ya se ha iniciado, instalando una honda diferencia con el “quietismo” que impusiera la conservadora transición a la democracia. A diferencia de ello, la marca fundamental del recorrido en que está ahora la sociedad chilena estriba en el hecho de que la historia hoy se vive en tiempo presente.

Bibliografía

- Ahumada, José Miguel (2019). *The Political Economy of Peripheral Growth: Chile in the Global Economy*. Nueva York: Palgrave.
- Canales, Alejandro; Canales, Manuel y Hernández, Cristina (2018). Trabajo y territorio en el nuevo agro chileno. Un estudio de *commuters* en tres comarcas del Valle Central. *Eure*, 44(131), 5-27.
- Caviedes, Sebastián (2018). *Neoliberalismo e intelectualidad en América Latina (1980-2003). Argentina y Chile* [Tesis de licenciatura]. Universidad de Chile. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/178187>
- Caviedes, Sebastián y Carvallo, Fernando (2021). *Orígenes socioeconómicos y trayectorias políticas en la Convención Constitucional chilena*. Santiago de Chile: Fundación Rosa Luxemburgo/Fundación Nodo XXI. <https://bit.ly/3s7Nm55>
- Cardoso, Fernando Henrique y Faletto, Enzo (1969). *Dependencia y desarrollo en América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

- Centro de Estudios Socioterritoriales (CES) (2021). *Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021*. Santiago de Chile: TECHO & Fundación Vivienda. <https://bit.ly/32RHHrm>
- El Desconcierto (15 de octubre de 2021). “Desolador”: A dos años del estallido solo hay cuatro condenas por violaciones a DD.HH. <https://bit.ly/3463jRn>
- Elias, Norbert (2016). *El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Espinoza, Vicente; Barozet, Emmanuelle y Méndez, María Luisa (2013). Estratificación y movilidad social bajo un modelo neoliberal. El caso de Chile. *Laboratorio*, (25), 169-191.
- Faletto, Enzo (1989). La especificidad del Estado en América Latina. *Revista de la CEPAL*, (38), 161-200.
- Faletto, Enzo (1979). La dependencia y lo nacional popular. *Nueva Sociedad*, (40), 40-49.
- Faletto, Enzo (1977). Clases, crisis política y el problema del socialismo en Chile. En Raúl Benítez Zenteno (coord.). *Clases y crisis política en América Latina* (pp. 284-314). México D.F.: Siglo XXI Editores.
- Fazio, Hugo y Parada, Magaly (2010). *Veinte años de política económica de la Concertación*. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
- Fernandes, Florestán (1973). Problemas de conceptualización de las clases sociales en América Latina. En Florestán Fernandes y Raúl Benítez Zenteno

- (eds.). *Las clases sociales en América Latina* (pp. 191-276). México D.F.: Siglo XXI Editores.
- Fontana, Josep (2017). *El siglo de la revolución: una historia del mundo desde 1914*. Barcelona: Crítica.
- Franco, Rolando; Hopenhayn, Martín y León, Arturo (coord.) (2010). *Las clases medias en América Latina: retrospectiva y nuevas tendencias*. Buenos Aires: CEPAL, Siglo XXI Editores/Secretaría General Iberoamericana.
- Fraser, Nancy (2015). *Fortunas del feminismo*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Gago, Verónica (2019). *La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- García Linera, Álvaro (2015). *La potencia plebeya: acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia*. Buenos Aires: CLACSO, Siglo XXI Editores.
- Gramsci, Antonio (1981). Análisis de las situaciones: relaciones de fuerza. En *Escritos Políticos (1917-1933)*. México D.F.: Siglo XXI Editores.
- Goyenechea, Matías (2019). Estado subsidiario, segmentación y desigualdad en el sistema de salud chileno. *Cuadernos Médicos Sociales*, 59(2), 7-12.
- Harvey, David (2005). *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid: Akal.
- Kaplan, Marcos (1969). *Formación del Estado nacional en América Latina*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

- Laclau, Ernesto (2005). *La razón populista*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Lechner, Norbert (1988). *Los patios interiores de la democracia: subjetividad y política*. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- Lechner, Norbert (ed.) (1981). *Estado y Política en América Latina*. México D.F.: Siglo XXI Editores.
- Márquez, Francisca (2020). Por una antropología de los escombros. El estallido social en Plaza Dignidad, Santiago de Chile. *Revista 180*, (45), 1-13.
- Martuccelli, Danilo (2021). *El estallido social en clave latinoamericana*. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
- Milanovic, Branko (2017). *Desigualdad mundial. Un nuevo enfoque para la era de la globalización*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Negri, Antonio (1994). *El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad*. Madrid: Ed. Libertarias Prodhufi.
- Negri, Antonio y Hardt, Michael (2004). *Multitud: guerra y democracia en la era del Imperio*. Barcelona: Debate.
- Paredes, Juan Pablo (2021). La “Plaza de la Dignidad” como escenario de protesta. La dimensión cultural en la comprensión del acontecimiento de Octubre chileno. *Revista de Humanidades de Valparaíso*, (17), 27-52.
- Peña, Carlos (2021). El Malestar en la modernización: el caso chileno. En Carlos Peña y Patricio Silva

- (eds.). *La revuelta de octubre. Orígenes y consecuencias* (pp. 19-46). Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- Pérez-Roa, Lorena (2019). Consumo, endeudamiento y economía doméstica: una historia en tres tiempos para entender el estallido social. En Kathya Araujo (ed.). *Hilos tensados. Para leer el octubre chileno* (pp. 83-105). Santiago de Chile: Ediciones Universidad de Santiago de Chile.
- Piketty, Thomas (2019). *Capital e ideología*. Buenos Aires: Paidós.
- PNUD (2019). *Diez años de auditoría a la democracia. Antes del estallido*. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Przeworski, Adam (1978). El proceso de formación de clases. *Revista Mexicana de Sociología*, (40), 109-141.
- Ruiz, Carlos (2020a). *Octubre chileno. La irrupción de un nuevo pueblo*. Santiago de Chile: Taurus.
- Ruiz, Carlos (2020b). Lucha social y unidad política: los senderos de la Unidad Popular. *Casa de las Américas*, (300), 13-28.
- Ruiz, Carlos (2019). *La política en el neoliberalismo. Experiencias latinoamericanas*. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
- Ruiz, Carlos (2015). *De nuevo la sociedad*. Santiago de Chile: Lom Ediciones.

- Ruiz, Carlos y Boccardo, Giorgio (2015). ¿América Latina ante una nueva encrucijada? *Anuari del Conflictu Social* 2014, (4), 765-783.
- Ruiz, Carlos (2014). *Los chilenos bajo el neoliberalismo. Clases y conflicto social*. Santiago de Chile: Ediciones El Desconcierto/Fundación Nudo XXI.
- Ruiz, Carlos y Caviedes, Sebastián (2020). Estructura y conflicto social en la crisis del neoliberalismo avanzado chileno. *Espacio abierto*, 29(1), 86-101.
- Ruiz, Carlos y Miranda, Camila (2018). El neoliberalismo y su promesa incumplida de emancipación: bases del malestar y la ola feminista. *Anales de la Universidad de Chile*, (14), 189-201.
- Rebón, Julián y Ruiz, Carlos (2020). Revueltas en y contra el neoliberalismo. Argentina, 2001 y Chile, 2019. *Sociedad*, (40), 57-163.
- Sanhueza, José Miguel y Carvallo, Fernando (2018). Conflictos y transformaciones en la educación superior chilena. En Víctor Orellana (comp.) *Entre el mercado gratuito y la educación pública. Dilemas de la educación chilena actual* (pp. 209-257). Santiago de Chile: Lom Ediciones/Nudo XXI.
- Sapelli, Claudio (2011). *Chile: ¿Más equitativo?* Santiago de Chile: Ediciones UC.
- Sennett, Richard (2005). *La corrosión del carácter*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- Solimano, Andrés (2018). Estrategias de desarrollo económico en Chile: crecimiento, pobreza estructural

- y desigualdad de ingresos y riqueza (pp. 63-86). En Diego Calderón y Felipe Gajardo. *Chile del siglo XXI: propuestas desde la economía*. Santiago de Chile: Ediciones Böll/Estudios Nueva Economía.
- Solimano, Andrés (2012). *Capitalismo a la chilena*. Santiago de Chile: Editorial Catalonia.
- Streeck, Wolfgang (2017). *¿Cómo terminará el capitalismo? Ensayos sobre un sistema en decadencia*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Tironi, Eugenio (2020). *El desborde. Vislumbres y aprendizajes del 18 O*. Santiago de Chile: Planeta.
- Torres, Esteban (2021). *La gran transformación de la sociología*. Buenos Aires: CLACSO.
- Touraine, Alain (1989). *América Latina. Política y sociedad*. Madrid: Espasa-Calpe.
- Segovia, Macarena y Toro, Paulina (5 de enero de 2022). Una campaña territorial histórica: las desconocidas figuras de Kast y Boric que empujaron la votación récord de 8,3 millones de chilenos. *Centro de Investigación Periodística*. <https://bit.ly/34pdErw>
- Virno, Paolo (2003). *Gramática de la multitud: para un análisis de las formas de vida contemporáneas*. Buenos Aires: Colihue.
- Weffort, Francisco (1968). *Clases populares y desarrollo social*. Santiago de Chile: ILPES.
- Winters, Jeffrey (2011). *Oligarchy*. Nueva York: Cambridge University Press.

- Wright, Erik Olin (2010). *Construyendo utopías reales*.
Madrid: Akal.
- Zavaleta, René (1986). *Lo nacional popular en Bolivia*.
Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Anexo.

Testimonios de la revuelta chilena

Rodrigo Pérez, estudiante universitario, presidente del Centro de Estudiantes del liceo Instituto Nacional en 2019

—El 2019 fue un año duro para los estudiantes, había un claro sesgo anti-juvenil. Partamos por el contexto que antecede a las evasiones en el Metro: ¿qué habían vivido como movimiento estudiantil hasta ese momento?

—Efectivamente el movimiento estudiantil tuvo un año muy complicado, muy violento, con mucha confrontación con el gobierno. Nunca por un tema educativo, sino por una cuestión de orden público. Se instaló, a lo largo del año, una idea de desorden, de delincuencia, de una posición anti sistémica de parte de los estudiantes. Por cierto que la acción directa es la esencia del movimiento estudiantil y que dentro de ella hubo mucha violencia ese año. Pero las autoridades nunca nos dejaron relevar la disputa educativa. Nosotros habíamos intentado visibilizar pilares fundamentales de nuestro petitorio, como la salud mental. Pero al final el

gobierno se enfocó en tratarnos como criminales, como personas a las que tenían que revisarles la mochila, que tenían que mostrar su carnet de identidad para entrar al colegio, a las que honra les quedaba poca. Algo que se instaló desde el gobierno y desde la prensa.

—Lo que hizo distinto al 2019 de los años anteriores, en los que habíamos impulsado las mismas demandas, es que contamos con el apoyo popular. La gente de verdad estaba cansada y consideraba que era brutal el nivel de arrogancia con que el gobierno trataba a la gente. Lo otro fundamental fueron las redes sociales, con su capacidad para generar movilizaciones espontáneas. Los secundarios nos organizábamos espontánea y emergentemente. Si bien tuvimos muchas reuniones y organizamos varios actos para manifestarnos durante el año, octubre fue distinto. Nosotros empezamos con la Universidad de Chile, el día lunes del fin de semana que se anunció el alza del pasaje. Después empezaron a sumarse distintos liceos; hablamos con distintos centros de estudiantes. Nuestro liceo, que fue uno de los precursores, junto con el Liceo 1, el Tajamar, el Liceo de Aplicación, los típicos liceos emblemáticos. Después se fueron sumando otros. Supimos que se habían movilizó en Puente Alto, en la estación Quilín, que no era algo común. No se veía antes ese nivel de

convocatoria. En Recoleta, Independencia y así en distintas estaciones del Metro, hasta prácticamente llegar a toda la Región Metropolitana. También a todo el país: veíamos que se movilizaban en Temuco, en Talca, en el sur. Así fue escalando. Fue un consenso tácito y creo que las redes sociales fueron las que nos unieron como estudiantes en ese consenso.

—*¿Cómo surge lo de organizar evasiones en el Metro?*

—Lo habíamos discutido en los años anteriores, no con las mismas personas porque cambian los representantes de los centros de estudiantes. Aunque siempre, discutiendo cómo nos movilizábamos, el Metro era un punto neurálgico. Pero esa vez no fue una estrategia premeditada. La conexión se produjo por el alza del Metro. Si hubiese sido el alza de los supermercados hubiésemos ido a los supermercados. Fue por el alza del pasaje. Todos ocupan el Metro. Quizás si el gobierno no hubiese subido el pasaje del Metro no hubiésemos tenido el 18 de octubre. Las convocatorias se realizaban principalmente por Instagram, la red social que más usaba nuestra generación. También por las páginas de los centros de estudiantes de los liceos, las páginas de *memes*, también las páginas politizadas que había, que tomaban posturas políticas.

—*¿Cómo evolucionó la relación con los transeúntes a medida que esto fue tomando cuerpo?*

—En los primeros días de las evasiones había un apoyo, pero no tan claro, entre la gente. Seguía lo de criminalizar; pensar que era el desorden por el desorden. Pero después fueron sumándose de a poco. Yo, por lo menos, que estuve durante esas dos semanas evadiendo y participando de las asambleas y convocatorias, veía que era evidente, día tras día, que las personas se iban convenciendo de que esto era necesario y que era un mecanismo que teníamos que ocupar como ciudadanos, dentro de lo poco que tenemos. Esto y el voto; esto, ilegalmente. Hacer valer nuestras opiniones y decir que era un momento de explosión.

—*Cuando todo se desata, ¿cómo los secundarios siguen participando en las manifestaciones?*

—Nosotros nos juntamos desde el bloque de coordinación que teníamos, el Bloque Secundario, que reunía a unos 11 liceos, con la ACES [Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios] y la CONES [Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios], y, desde esa posición, que no representaba necesariamente a otras orgánicas, decidimos que era el momento de volcar las acciones y organizaciones desde los centros de estudiantes hacia los territorios, a las comunas. Ya no era el

centro, no era la Alameda ni La Moneda. Creo que eso caracterizó al estallido en general: volcarse a los territorios y empezar a nutrir y construir un discurso y organización desde las asambleas territoriales, que se autogestionaron y levantaron en muchos lugares.

—En perspectiva, ¿qué papel le atribuyes a lo que hicieron los jóvenes en la revuelta?

—Creo que el movimiento estudiantil es el punto de partida de la revuelta social. Pero no se puede hablar de ella sin los trabajadores. El estudiante da el contexto y la posibilidad de una revuelta, pero sin el apoyo popular no se hubiese producido lo que vimos. Desde el 2001, cuando se produce el “Mochilazo”, el movimiento estudiantil y otros sujetos revolucionarios venían instalando los problemas que existían en Chile. Pero no teníamos el apoyo popular que tuvimos, primero el 2011, y sobre todo el 2019. Fue un trabajo constante de muchos años, un relevo que se pasó de generación en generación; un proyecto que ha perdurado a lo largo del tiempo, en el corazón de la educación pública. Un proyecto educativo, de país, que no es netamente funcional al sistema, orientado solo a crear buenos trabajadores para las empresas, sino que nutre, considera y valora lo público. Así, se pasa un relevo, año a año, movilización tras movilización, de

conciencia pública. La revuelta se produce porque los trabajadores toman esas condiciones y las hacen propias, y protagonizan la revuelta.

Gunther Birchmeier, licenciado en Derecho, joven profesional de “primera generación”

—¿Cómo fue tu paso por la educación superior? ¿Qué significó para tu círculo familiar?

—Provengo de una familia de clase media vulnerable, pese a tener formación universitaria, la que, a la fecha, está incompleta. Soy egresado de Derecho, estudié en una universidad privada. Con mucho esfuerzo, por el acontecer familiar, viví esa etapa bajo una crisis económica. Por eso, por el componente económico, mi experiencia universitaria siempre la voy a definir como un calvario. El sobreesfuerzo que la sociedad le exige a alguien que quiere estudiar, para entrar a un sistema que está orientado a la clase media. Porque, digámoslo, no se puede negar que para la gente más pobre sí hay programas, se focaliza la ayuda y esas personas sí pueden dedicarse a estudiar. La clase rica, obviamente, no tiene ningún problema. Pero los que estamos al medio estamos en una situación bastante compleja.

—¿Por qué hablas de un calvario?

—Porque me tocó, por la crisis económica familiar, trabajar y estudiar. Tuve que trabajar en empleos precarios, de *mall* o de comercio, de repente de mesero; tenía una beca de la municipalidad que me ayudó un poco. Pero estoy endeudado hasta el día de hoy con el banco por el crédito universitario, aparte de que a la universidad había que pagarle una mensualidad. Voy en la cuota 80 de 240 del crédito universitario, habiendo egresado en 2012. Entonces, imagínate, uno está estudiando, pero ya está con una deuda. Por eso lo defino como un calvario, pese a que uno tuvo una buena formación y algunos profesores te marcan. Pero la verdad es que no pude aprovechar el espacio para estudiar de manera más concienzuda, para involucrarme en más cosas, porque había otras preocupaciones antes, como las familiares. Mi hermana pudo titularse porque recibió ayuda en la universidad en la que estuvo. Pero yo no recibí nunca una ayuda estatal, una beca, ni siquiera de alimentación. Salvo la municipalidad que me dio una beca por mis notas. Por eso también me defino como de clase media: porque no somos propietarios de vivienda; porque, al ser de “primera generación”, mis padres no accedieron a la universidad; porque no tengo un vehículo, no tengo ahorros, no tengo bienes, soy un trabajador. No tengo la necesidad material cubierta.

Aun así, desde la otra vereda, veo un tremendo beneficio en el sistema privado de salud. Hace poco me atendí ahí y quedé impresionado porque hasta por WhatsApp uno coordina las cosas. En el hospital público eso no sucede. Por eso, en el fondo, uno está entre esas dos realidades.

—Desde esa experiencia, ¿cómo te involucraste en las protestas de octubre de 2019?

—Me vi compelido a ser parte de todo lo que estaba pasando porque vivía a una cuadra de La Moneda. Fue increíble sentir cómo cae un gobierno y súper angustiante por momentos. La protesta social fue fuerte. Me llamó mucho la atención que esto no fuese solo un asunto de Santiago, que fuera una convulsión completa. La gente salió a caminar, a protestar. Fue un despertar de conciencia colectivo. Yo andaba evangelizando con lo de la nueva Constitución, frente al discurso de que “la Constitución no importa”. En Plaza Italia conversaba con la gente, con todos, hasta con los Carabineros. Venían amigos y también personas desde fuera de Chile y les preguntaba: “¿Cómo es la pega [trabajo] allá? ¿Cómo es la plata?” Porque acá hay un problema de remuneraciones, está el problema de la mala distribución de la riqueza. Aunque creo que ha habido avances sociales, como lo que significó para nuestra generación el acceder

a la educación, hay una clase A, B y C que acceden a servicios A, B y C en salud, en educación, en la banca, en los supermercados, en lo que tú quieras. Está todo segmentado.

—*¿Por qué crees que podía encontrarse a profesionales como tú en la Plaza Dignidad protestando, a veces incluso enfrentándose a los carabineros?*

—Se veía que estaba también presente ahí el discurso de la gente más vulnerada, la más pisoteada por el sistema. Sin las oportunidades, con trabajos precarios. En mi caso, pese a lo que viví en la universidad, tengo la suerte de trabajar bien en el sector privado. Pero hay un problema con las remuneraciones, porque aquí a la gente no le pagan lo que le tienen que pagar. Entonces yo, en algún minuto, a pesar de ser encargado de contratos en una empresa de ciberseguridad en Sanhattan [distrito financiero de Santiago] y ser egresado de Derecho, tuve que trabajar en Uber repartiendo en bicicleta. No me alcanzaba. Entonces la frase de los 30 pesos sí tiene una justificación. Para alguien como yo, que soy soltero, que no tengo hijos, que ayudo a mi grupo familiar. Hay una situación de vulnerabilidad que es muy generalizada en la población chilena. Hay que arreglárselas como uno pueda. Ahí está el asunto del estallido y que retrata muy bien por qué había gente profesional en la plaza,

por qué había amigos que se reunían a conversar. Ahí había carrete [fiesta], pero también violencia, porque a cierta hora uno se tenía que retirar porque la confrontación se ponía desagradable. Yo no justifico la violencia, pero no había una condena tan fuerte a la violencia porque sí se entendía que hay una situación pendiente, que yo espero que la nueva generación política pueda abordar de manera efectiva.

—¿Qué expectativas tienes con lo que está pasando en Chile, a dos años de la revuelta?

—Yo esperarí que hubiera más cohesión social. No puedes tener un país tan dividido en castas sociales, porque eso genera malestar, mala onda, la posibilidad de desarrollo se trunca. Trabajando en el sector tecnología veo posibilidades infinitas, hay muchas capacidades. El país ha avanzado. Eso es real. Es cosa de preguntarles a los abuelos si tenían el baño en la casa. El país tiene un sistema, tiene una organización que avanza, que no se queda pegada. Eso lo asocio a una característica del chileno: se cae todo y la gente se para *al toque* [enseguida] y sale a trabajar. Creo que ahí hay una razón de por qué el estallido movilizó a tanta gente, en el sentido de que salieron a exigir un cambio.

Sibila Sotomayor, artista escénica y científica social, integrante del colectivo Las Tesis

—*Quisiera pedirte reconstruir la historia previa a “El violador eres tú”, la performance que las hizo conocidas en todo el mundo en 2019: ¿a qué procesos sociales y creativos estaba conectada?*

—El colectivo Las Tesis se funda a inicios del 2018 para difundir teoría y enunciar ciertas denuncias feministas desde las artes y desde una óptica interdisciplinaria. Nace de la convicción de que todas las personas aprendemos de manera distinta, que no a todos, todas y todes se nos da el aprender a través de la lectura y, por ende, que es necesario generar un ejercicio de traducción hacia el cuerpo, lo visual, lo sonoro, lo textil, que es lo que seguimos haciendo hasta ahora. Mientras veníamos trabajando ese año —en otra tesis primero, la de Silvia Federici y su libro *Calibán y la Bruja*— explota la revuelta feminista, primero en las universidades pero también en vinculación con organizaciones territoriales, o al menos así fue en Valparaíso, donde nosotras vivimos. Aquí hubo un diálogo muy fructífero entre los movimientos estudiantiles feministas, las asambleas de mujeres y disidencias del sistema sexo-género y también organizaciones barriales. Eso impulsó aún más nuestro objetivo y

el ímpetu de concretarlo desde la *performance*; más que contando historias, ejecutando acciones desde lo colectivo.

—Luego, en el contexto del levantamiento popular de octubre de 2019, esa colectividad tuvo necesidad de ampliarse. Y a su vez nos llevó a preguntarnos cómo desde las artes podíamos ponernos al servicio de esta revuelta que iba mucho más allá de Valparaíso, donde, por lo demás, la represión fue brutal. También nos preguntábamos qué pasaba con las demandas feministas, porque comenzaron a aparecer listados de demandas sociales y nos dábamos cuenta que ellas no estaban ahí. También nos inquietaban las denuncias contra la institución de Carabineros por violencia político-sexual, de la cual, una vez más, mujeres y disidencias éramos las personas más afectadas. Todo eso nos hizo tomar la decisión de salir a la calle con lo que nosotras hacíamos. Si bien trabajamos formatos adaptables a distintos espacios, no habíamos trabajado antes la intervención callejera. Lo hicimos porque surgió la invitación de una organización artística, que se formó en el mismo contexto y que se estaba haciendo las mismas preguntas que nosotras, llamada “Fuego. Acciones en Cemento”, que nos convocó a hacernos cargo de una de las “barricadas escénicas” que iban a llevarse adelante durante una semana a la una de la tarde, como cortes de

tránsito a través de las artes escénicas. A partir de ahí decidimos hacer una convocatoria abierta para realizar una intervención en el espacio público, desde los cuerpos y las artes, a partir de una coreografía y canción que ya teníamos desde antes, del segundo trabajo que habíamos estado desarrollando durante todo el 2019, “El violador eres tú”, basado en el mandato de violación que está en el libro *las Estructuras elementales de la violencia* de Rita Segato y que también toma un extracto de la *Teoría King Kong* de Virginie Despentes. Una articulación que no es solo texto, sino que también rescata otros referentes visuales y documentales con los que veníamos trabajando. En la canción intentamos sintetizar todas esas ideas, buscando que fuera pegajosa, y la adaptamos a un formato de intervención callejero, agregándole, además, una estrofa de parodia al himno de Carabineros de Chile. Así se generó un ejercicio de apropiación, de ocupación y de feminización del espacio público, activando lo político desde la *performance*, desde los cuerpos, que es algo en lo que nosotras creemos mucho.

—¿Crees que su trabajo ayuda a recuperar el sentido original que tenían las protestas y que por esas fechas parecía desdibujarse por la violencia que crecía?

—Creo que cada territorio vivía distintas realidades. Lo que estaba pasando en Valparaíso no era

lo que pasaba en Santiago o en Talca o en Punta Arenas. Pienso que esa sensación de que esto se estaba yendo por otro lado varió según los territorios. Quizás lo que hicimos contribuyó a, como dices, refrescar o poner algunos temas sobre la mesa. Pero no puedo afirmarlo. Lo que sí creemos, y lo hemos conversado con mis compañeras, es que, respecto a las demandas feministas, fue una manera de ponerlas en un lugar de protagonismo, que no estaban teniendo. Eso a su vez generó una reacción, no solo desde los sectores conservadores, sino también desde los sectores de izquierda, respecto a decir que nosotras estábamos desviando la atención de los problemas reales e importantes, lo que es una reacción ante el feminismo, me parece, muy machista y que bordea la misoginia, además de que demuestra incapacidad para entender que las demandas feministas están articuladas con las otras demandas sociales. Muchas personas apuntaron a la protesta feminista como un problema, como una forma de desunir una lucha. Algo en lo que nosotras no estamos de acuerdo. Nos parece que, por el contrario, generó otro tipo de cohesión. Entre personas que no se estaban sintiendo completamente representadas con lo que estaba pasando, y que desde ahí sintieron que podían ser parte con mayor propiedad de ese movimiento que se desplegaba.

—*Debe haberles sorprendido lo que ocurrió tras lanzar la performance, replicada y apropiada en muchos lugares: ¿a qué creen que se debe ese impacto mundial? ¿Se vincula con el impacto de la revuelta misma?*

—No nos cabe duda que en otro contexto esta *performance* habría sido solo lo que era nuestra intención inicial: una intervención en tres puntos estratégicos de Valparaíso, cortando el tránsito, para luego desaparecer, porque comprendíamos que mujeres y disidencias estábamos sometidas a la vulnerabilidad de ser víctimas de violencia político-sexual, por lo que debíamos cuidarnos mucho en ese contexto. De ahí la corta duración, la simplicidad de la intervención. La revuelta, sin duda, potenció que la intervención pudiera verse desde otros lugares. Desde Valparaíso tuvo primero una viralización dentro de Chile, que tuvo que ver con el contexto. Cuando fuimos a Santiago, porque nos pedían que replicáramos la intervención allá, nos dimos cuenta de lo que estaba pasando cuando llegamos a la Plaza de Armas y había una multitud de gente. La última parada que hicimos fue en una comisaría y esa vez nos terminaron atacando con gas pimienta los carabineros. Después de esa vez en Santiago, se produjo un efecto bola de nieve y ahí decidimos inmediatamente hacer un llamado a que distintos grupos se autoconvocaran, a que hicieran la intervención donde estuvieran y

la adaptaran. ¿Por qué el impacto en todos lados? Nuestra única explicación es que el patriarcado parece estar en todas partes. Que la violencia sexual es un problema en distintas culturas, del que no se salvan ni los países del primer mundo. Pero no tenemos más explicación que eso, lo que pasó solo fue. Y ahí es valioso conocer también el testimonio de quienes participaron en ello.

Elisa Loncón, académica mapuche y primera presidenta de la Convención Constitucional

—¿Cómo se gesta el proceso por el cual los pueblos originarios logran escaños reservados en la Convención Constitucional y aquel que la lleva a convertirse en su primera presidenta?

—Lo que hay que entender es que las luchas, rostros y demandas de los pueblos indígenas han sido invisibilizados por los partidos políticos y por el Estado y la institucionalidad. Pero nosotros siempre hemos estado, hemos tenido organización, discursos y luchas, aunque no seamos considerados actores relevantes para el sistema estatal-colonial que lo dirige, o para la mirada paternalista y colonialista de los partidos, sean estos de derecha o de izquierda. Yo vengo desde el trabajo más

autonómico, soy hija de personas que siempre estuvieron en el proceso político mapuche, durante y antes de la dictadura, de abuelos que también lucharon y de antepasados que estuvieron en contra de la ocupación militar. Fui formada, por eso, con una memoria oral contundente, al ser toda mi familia hablante del idioma. Eso forma una historia paralela a la historia oficial.

Vengo impulsando desde hace años los derechos lingüísticos de los pueblos. Porque aunque en Chile hay una larga tradición histórica de defensa de los derechos humanos, las lenguas originarias no han sido procesadas como derecho humano fundamental por los actores políticos, pese a que la lengua es lo que nos define como seres humanos. Por eso para mí resulta urgente que la lengua no se pierda, porque se pierde una forma de ser y de estar en el mundo. Así, entonces, no es suficiente la recuperación de tierra, que es una lucha importante del pueblo mapuche: sin contenido propio nos convertiríamos solo en un extractivista más.

Cuando llegó el estallido social, nosotros nos dimos cuenta del acto del pueblo de Chile de asumir la bandera mapuche. Hubo un momento en que toda Providencia [comuna] estaba letrada con textos en mapudungun, incluso letreros que decían “ahora te creemos pueblo mapuche”. Porque antes de eso se pensaba, como instalaron todos los gobiernos,

que nosotros éramos delincuentes y terroristas. Recuerdo que en los años noventa, como miembro de la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras, nos catalogaron como “asociación ilícita”. Nosotros creamos la bandera [*Wenufoye*] y dentro de los ilícitos estaba ella. Entonces, ese debate, toda esa emergencia, la veníamos cultivando.

Al proceso constituyente entramos vía escaños reservados. Me propusieron ser candidata y acepté, sin esperar ganar, sino con el afán de poner el tema lingüístico. Así hice mi campaña. Cuando finalmente fui elegida, ya estaba el relato de que la presidenta de la Convención debía ser mujer e indígena. Nosotros somos 7 escaños reservados mapuche y yo manifesté mi opción de ser candidata. Tras el apoyo, los mapuche fuimos los primeros en lanzar una candidatura. Y al hacerlo se generó una voz de no aceptación de parte de gente de los escaños reservados del Norte, gestándose un relato de que yo sería prácticamente una infiltrada de la Concertación, sin voz propia. Conversamos con el Frente Amplio sobre hacer una candidatura rotativa para dar espacio a otros sectores sociales y ampliar la mesa a todos los sectores políticos, a través de vicepresidencias. Así, fui electa presidenta y su candidato vicepresidente.

—¿Qué significado le atribuye, en términos históricos y de oportunidad política, a la presencia de los pueblos originarios en la definición de la nueva Constitución chilena?

—Lo que pasa es que cuando una está vinculada a este proceso, hay aciertos en la lucha y cuestiones que son importantes de comprender. En mi tiempo en las organizaciones escuché de los mayores que decían que la opresión no es a perpetuidad, que los pueblos se liberan. Y eso es muy significativo para nosotros, porque hemos conocido pueblos que se han liberado, como en Sudáfrica del *apartheid* o acá mismo los pueblos altiplánicos en Bolivia que llegaron a tener un presidente, o en la zona vasca, que logra la autonomía y el reconocimiento político. El pueblo mapuche también tiene conciencia de estar bajo una opresión estatal y luchamos para que esto no sea a perpetuidad. Cuando creamos la bandera, instalamos un proceso de descolonización y un debate sobre la autonomía de los pueblos indígenas. La bandera cumple esa función de evitar ir detrás de la bandera chilena o de la de un partido, para tener una forma de representación propia. En los años noventa eso no fue entendido. Había solidaridad del movimiento estudiantil y teníamos grupos de apoyo, pero en ello no había un relato teórico que lo sustentara. En cambio, en la década de los 2000, se produce una discusión sobre

la necesidad de que los movimientos sociales vayan tras un proyecto común, entendiendo que los que controlan el poder siempre están unidos. En tal sentido, visto el estallido social, hay una maduración del movimiento social chileno, al lograrse una inteligibilidad entre todas las luchas en torno a la causa común de avanzar por la dignidad del pueblo y de las personas.

Hoy varios cuerpos teóricos permiten comprender la lucha de los pueblos indígenas. Por eso la sociedad chilena puede entender nuestros discursos. Unos que no están instalados en las derechas o izquierdas, que siguen con un pensamiento eurocéntrico y colonial. Por eso la crisis de los partidos políticos con respecto a los movimientos sociales, porque restringieron tanto sus marcos de comprensión de la lucha social que no fueron capaces de incorporar la lucha de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los jóvenes y diversidades sexuales. Por eso en esta época el pensamiento de los pueblos indígenas crece, se descoloniza y tiene una propuesta de futuro, desde un paradigma relativo a la interdependencia entre seres humanos y con la naturaleza. Ese es el pensamiento que hoy toma fuerza y explica por qué el movimiento constitucional chileno es valorado afuera: se ve una ampliación de la democracia vía la integración de diferentes discursos.

—*Respecto a su presidencia en la Convención, ¿qué balance hace de ella?*

—Nosotros hicimos un proceso organizado, sistemático, transparente y por ello se logró instalar el órgano constituyente, que no existía y sobre el cual no había nada. Lo hicimos y creamos los reglamentos y comisiones e instalamos las discusiones sobre lo plurinacional, la descentralización, la paridad y la diversidad sexo-genérica. Todo eso hoy son las líneas que nos orientan. Ese éxito de instalación se reconoce, pese a que, como era la apuesta del gobierno, se esperaba que fracasáramos, razón por la que siempre estuvo ausente y, en vez de colaborar, hasta el último momento boicoteó el proceso. Se suma el conservadurismo de algunas de las derechas, aunque no todas tienen la misma opinión, respecto a cuestionar el hecho de que nosotros defendamos las identidades. Para ellos no es tema la lucha identitaria. Solo les interesa defender los capitales y el control político-económico, no el ser y estar de las personas. A nosotros, por el contrario, nos interesa defenderlo.

Frases callejeras

“¡Evadir, no pagar. Otra forma de luchar!”

“¡Evade!”

“No son 30 pesos, son 30 años”

“Chile despertó”

“Hasta que valga la pena vivir”

“Hasta que la dignidad se haga costumbre”

“Chile quiltro, no tiene dueño”

“No + abuso”

“El Estado opresor es un macho violador”

Sobre los autores

Carlos Ruiz Encina es sociólogo y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Académico del Departamento de Sociología de la misma universidad, que dirigió entre 2014 y 2018. Sus temas de investigación son la estructura y el conflicto social, la relación entre Estado, neoliberalismo y modelos de desarrollo y la teoría sociológica latinoamericana. Ha publicado los libros *De nuevo la sociedad* (Lom, 2015), *La política en el neoliberalismo. Experiencias latinoamericanas* (Lom, 2019) y *Octubre chileno. La irrupción de un nuevo pueblo* (Taurus, 2020).

Sebastián Caviedes Hamuy es sociólogo y magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Docente del Programa Académico de Bachillerato e investigador doctoral en el Doctorado en Ciencias Sociales de la misma universidad. Becario de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (2021-2025).

Sus temas de investigación son la relación entre Estado, economía y sociedad en perspectiva latinoamericana, los vínculos entre neoliberalismo y tecnocracias y entre empresariado y desarrollo económico.

En este libro, Carlos Ruiz Encina y Sebastián Caviedes hacen un balance del movimiento social que, de la noche a la mañana, resquebrajó la imagen ejemplar de Chile en América Latina. El 18 de octubre de 2019, la fortaleza del incestuoso matrimonio entre neoliberalismo y democracia, cuyos defensores se esforzaron por presentar al mundo tantas muestras de progreso económico y estabilidad política, hizo agua por los cuatro costados. Tras más de dos años desde su inicio, la revuelta chilena decanta en las coordenadas de un escenario de crisis más amplio. Mientras sigue el choque entre las fuerzas de la transformación y el conservadurismo en reorganización, hoy lo seguro es, sin embargo, que el cambio social ya se ha iniciado y que la historia se vive en tiempo presente.

Desde diferentes tradiciones del pensamiento crítico y las ciencias sociales, la biblioteca En Movimiento pone en debate la riqueza y el protagonismo de los principales movimientos, revueltas y conflictos de la América latina y el Caribe del siglo XXI y los senderos de transformación que abren.

ISBN 978-987-613-280-8



 **CLACSO**